“¡Que el gobierno entienda, lo primero es la vivienda!” *

La organización de los damnificados **

ALEJANDRA MASSOLO

La tarde del 24 de octubre de 1985, en el auditorio 5 de mayo de la Unidad Habitacional Tlatelolco, fue el momento de encuentro de los damnificados de la ciudad de México por el terremoto del 19 de septiembre. Había transcurrido poco más de un mes y en ese lugar; testimonio de destrucción y tragedia; se realizaba el Primer Foro de Damnificados y se constituía la Coordinadora Única de Damnificados (CUD). Aquí, los protagonistas de este acto de solidaridad, participación y organización social, estaban más nítidamente perfilados e identificados por los efectos concretos que el sismo tuvo sobre su vida cotidiana, y por las modalidades que adquiría la política e intervención del gobierno frente a sus necesidades y demandas. Ya se había despejado —de esa confluencia espontánea y solidaria de diversos sectores de habitantes de la ciudad, que brindaron ayuda y apoyo en los primeros días— el segmento de la sociedad civil que asumiría la alternativa de participación colectiva para la protesta, la defensa y la tarea de reconstrucción con objetivos de justicia social para sus habitantes.

Los gérmenes que hicieron brotar las primeras movilizaciones y formas incipientes de organización ya estaban dados en las calles de los barrios y en las unidades habitacionales desde las primeras experiencias vividas después del sismo, pero también anteriormente. Cada representación de las organizaciones vecinales que subía al presidium para integrar la CUD era portadora de un trozo de historia *de* la ciudad y hecha *en* la ciudad de

* Consigna de la Coordinadora Única de Damnificados (CUD).

** Este trabajo cubre la información hasta marzo de 1986 y ha sido posible realizarlo gracias a la colaboración de las organizaciones de vecinos damnificados, quienes aportaron sus opiniones, experiencias y materiales de difusión. Para ellos mi especial reconocimiento. Los alumnos de la Escuela de Trabajo Social de la UNAM: Guillermo Álvarez, Hortensia Belmont, Irma Lara, Ma. Félix Martínez, Elisa Neri, Ma. Teresa Reyes y Ma. Teresa Peralta participaron en la elaboración del fichado hemerográfico y de algunas entrevistas. El trabajo mecanográfico estuvo a cargo de Alicia Saloma, con el apoyo de Lourdes Martínez. Asimismo agradezco al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM el estímulo y apoyo institucional para poder llevar a cabo esta investigación. Con Alejandra Moreno Toscano, mi deuda por su solidaridad y por su talento de maestra.

México, de las viejas y nuevas formas de construcción social y material del espacio urbano y de la condensación de sus contradicciones y conflictos.

Estaban los barrios populares del centro: Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, Unión Popular de Inquilinos de la Colonia Morelos-Peña Morelos, Unión de Vecinos y Damnificados del Centro, Unión Popular Centro Morelos, Unión de Vecinos de la Colonia Doctores, Unión Emilio Carranza, Unión de Vecinos del Centro, Unión Popular Valle Gómez, Colonia Peralvillo, Colonia Faja de Oro, Colonia Asturias, Colonia Nicolás Bravo, Colonia Obrera, Arcos de Belén Centro, Campamento Salvatierra, Asociación Morelos, A. C. y vecinos del barrio de Tepito; los representantes de las organizaciones de la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco (Frente de Residentes de Tlatelolco, Consejo de Edificios en Autoadministración, Asociación de Residentes de Tlatelolco y la Coordinadora de Cuartos de Azotea) y del Multifamiliar Benito Juárez, modelos arquitectónicos de la década de los años 1950 y 1960 para las clases medias y empleados del gobierno, y la Colonia Roma, de antigua raigambre porfirista, "modernizada" tan brutalmente como la golpeó el terremoto, por medio de la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre, que también integró a vecinos de la Colonia Condesa. La muerte y la explotación en el trabajo estuvo presente en la representación del Sindicato Nacional de Costureras 19 de septiembre, constituido el 20 de octubre en las calles de San Antonio Abad.

La convergencia del movimiento social de damnificados fue el resultado de una vivencia y una certeza, para la mayoría evidente a partir del sismo, para otros, de larga experiencia y lucha anterior: que sólo mediante la coordinación y fortalecimiento de los esfuerzos colectivos, de las presiones, demandas y negociaciones en común podría evitarse otro daño y grave peligro: el de ser despojados de su pertenencia al lugar habitado en la ciudad, de su patrimonio de arraigo colectivo conquistado por generaciones, del derecho a la vivienda y al empleo. Ya este peligro había movilizó a los habitantes de la Colonia Morelos y Tepito, Guerrero, Valle Gómez y a los residentes de Tlatelolco y del Multifamiliar Juárez, en la primera manifestación y protesta pública el 27 de septiembre, cuando intentaron entrevistarse con el Presidente en los Pinos para informarle sobre la situación que sufrían, por la "desorganización de las autoridades, abusos de las dependencias encargadas de la seguridad en la zona y contubernio entre peritos y caseros para realizar desalojos masivos y construir en esas áreas unidades habitacionales y comerciales" (*La Jornada*, 28 de septiembre de 1985).

La conciencia de la necesidad de movilización y organización se fue incubando desde los primeros días en que los vecinos se hicieron cargo de las tareas de rescate, distribución de agua y comida, instalación de campamentos y albergues, autogestión para el apuntalamiento y primeras reparaciones de las viviendas, remoción de escombros y peritajes, con el apoyo de arquitectos de las universidades y grupos profesionales. Los tiempos

fueron intensos e inciertos y los vecinos se fueron buscando. Por iniciativa de organizaciones de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP), de sindicatos independientes, universidades, comunidades cristianas, grupos culturales, mujeres y jóvenes, se constituyó el 25 de septiembre el Comité Popular de Solidaridad y Reconstrucción, que abrió una cuenta bancaria para recaudar fondos. La convocatoria expresaba el objetivo de fortalecer la corriente de solidaridad y apoyo hacia los damnificados, el impulso de un plan de reconstrucción basado en la atención a las necesidades de la población que perdió su vivienda y empleo y la suspensión del pago de la deuda externa para destinar esos recursos a la reconstrucción. Ya estaban presentes en este Comité algunas de las primeras organizaciones de damnificados, como la Coordinadora de Organizaciones de Tlatelolco, los vecinos e inquilinos de la Colonia Roma, el Comité de Inquilinos del Centro y la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero.

Varias de las demandas que se plantearon en ese momento permanecieron como los puntos de acuerdo centrales que aglutinaron la lucha y negociación que continuó desarrollando la actividad de la CUD. Estas demandas eran: la participación democrática de las organizaciones vecinales en los programas de reconstrucción del gobierno, la restitución de la vivienda, el derecho al arraigo y el deslinde de responsabilidades por los derrumbes; otras respondían a la coyuntura que todavía vivía la población en las zonas afectadas, como el retiro del ejército de las zonas acordonadas por considerar que entorpecía las labores de rescate de personas y bienes.¹

Esos días finales de septiembre fueron de efervescencia de iniciativas colectivas y de creación de un nuevo entramado social que hacía emerger a los damnificados como agentes políticos en el plano del conflicto social y la disputa política por la reconstrucción de la ciudad, que causó el terremoto. En un artículo periodístico se comentaba que la gente "siente que en esos días se le ha afirmado un nuevo sentimiento: confiar, pero en sí mismos y todos juntos", y que la experiencia de participación de la población para proveer de ayuda y apoyo en los primeros días del desastre, había fundado una seguridad en su "capacidad colectiva de actuar y decidir" y una convicción "de que el sistema institucional existente ni quiere ni puede dar un cauce útil a esas fuerzas sociales" (Adolfo Gilly en *La Jornada*, 27 de septiembre de 1985).

Y existía otra convicción, la de que sólo apelando a la primera y última instancia representada por el presidente de la República podía lograrse la atención y solución de sus problemas y sus demandas, el reconocimiento del movimiento y las organizaciones de damnificados como portadores legítimos de intereses y reivindicaciones sociales sobre las condiciones de vida en la ciudad, y también que desde esa cúspide del poder estatal pudieran aflojarse las inercias y obstrucciones que presentaban las mediaciones político-adminis-

¹ *La Jornada*, 25 de septiembre de 1985, y desplegado del Comité Popular de Solidaridad y Reconstrucción.

trativas en la ejecución de sus funciones y de las políticas establecidas por el Ejecutivo.

Como se ha señalado en diversos análisis,² esas mediaciones no funcionaron en la medida que requería la situación social provocada por los sismos. En realidad, fueron un conjunto heterogéneo de ciudadanos librados a sus propias fuerzas, en busca de interlocutores, batallando por sus derechos, desprovistos de canales institucionales de representación y participación efectiva, quienes, para empezar, tomaron sus territorios de habitación, convivencia y trabajo como lugares de resistencia y solidaridad a largo plazo y, para seguir, iniciaron la ardua y compleja tarea de abrir, desde los escombros, un surco de participación independiente y democrática en la gestión social de la ciudad.

LA PRIMERA MARCHA LARGA

Progresivamente, se fueron construyendo las identidades colectivas como vecinos y ciudadanos afectados que se convertían en sujetos políticos de un movimiento urbano que surgía de una coyuntura de desastre y emergencia pero que, desde sus primeras denuncias y demandas, manifestaba un cuestionamiento de la forma como la ciudad ha sido construida y utilizada, del autoritarismo y burocratización de los aparatos del Estado, de la impunidad de la especulación inmobiliaria y la segregación social en el espacio urbano; todos ellos rasgos de la estructura política y económica de la ciudad que los efectos del terremoto revelaron con mayor claridad.

Juntas o por separado, las movilizaciones de los damnificados en el mes de septiembre se entrelazaban frente al Palacio Legislativo o en camino hacia la residencia presidencial y presentaban sus primeros pliegos petitorios a las autoridades y a los medios de difusión. Frente a los diputados, los vecinos de las colonias Morelos y Tepito, de Tlatelolco y del Multifamiliar Juárez denunciaron la falta de atención a sus necesidades apremiantes y solicitaron la mediación de sus representantes ante las autoridades del DDF y SEDUE para que tuvieran eco sus demandas. La Unión Popular de Inquilinos de la Colonia Morelos-Peña Morelos y los habitantes de Tepito rechazaron la alternativa de trasladarse a los albergues por temor a perder el derecho a habitar sus lugares de arraigo y reclamaron: coordinación de los peritajes entre las autoridades y las organizaciones vecinales, maquinaria para la remoción de escombros, materiales de construcción y créditos

² Humberto Musacchio, *Ciudad Quebrada*, México, Ed. Océano, 1985; Luis Salazar, "Sismo, Política y Gobierno", en *El Cotidiano*, núm. 8, noviembre-diciembre de 1985, UAM-Atzacapozalco; E. Jacobo y Luis Méndez, "Bueno... y después de todo ¿cuál Sociedad Civil?", en *ibid. El Cotidiano*; Taller de Estudios Urbanos Regionales, "Hacia el futuro de la ciudad", en *Nexos*, núm. 95, noviembre de 1985. *Proceso*, 30 de septiembre de 1985 y 14 de octubre de 1985. Cristina Pacheco, *Zona de Desastre*, México, Ed. Océano, 1986.

para reponer la vivienda en los mismos terrenos, que no se modificara el uso del suelo para la habitación de sus antiguos moradores y que se detuvieran las maniobras fraudulentas, los abusos y desalojos de los caseros.³ Por medio de la prensa, la Unión de Vecinos y Damnificados de la Colonia Roma hizo público un documento en el cual exigió que el pago de los intereses de la deuda externa fuera destinado a los programas de reconstrucción y que los damnificados estuvieran representados en la Comisión Nacional de Reconstrucción, únicos ausentes; la investigación de la causa de los derrumbes y el deslinde de responsabilidades, el congelamiento de renta, el sobreseimiento de los juicios de desahucio y la expropiación de terrenos baldíos para construir viviendas para los damnificados.⁴

La demanda de expropiación de predios en beneficio de los inquilinos fue presentada al presidente de la República por representantes de algunas colonias populares (Penitenciaría, Valle Gómez, La Merced, Tepito, Emilio Carranza, Centro y Nicolás Bravo) en los primeros días de octubre.⁵ Se iniciaba, según la declaración oficial, una etapa de diálogo con los habitantes damnificados propiciada por el jefe del Ejecutivo. Este encuentro y voluntad de diálogo entre representaciones vecinales y el presidente (al cual asistieron autoridades de la SEDUE y los delegados políticos de la delegación Cuauhtémoc y V. Carranza), probablemente también trató de provocar un "efecto de demostración" hacia abajo, es decir, en las instancias político-administrativas que el propio Estado ha definido para responder a las necesidades de la población del DF y planificar la ejecución de la política de vivienda y desarrollo urbano.

Sin duda, se inició una etapa de intensa búsqueda de interlocución, de probar fuerzas y de aproximaciones para la negociación, en un complejo proceso social en el cual la realidad del terreno político y social cotidiano, con sus especificidades territoriales y constelación de agentes sociales actuantes, fue definiendo y redefiniendo las formas y redes de encuentros y desencuentros entre las mediaciones estatales y ese segmento de la sociedad civil que estaba tomando cuerpo en las organizaciones vecinales de damnificados. Quizás en pocas ocasiones en la ciudad de México se estableció una confrontación de ideas y aspiraciones, opciones y decisiones, proyectos y concepciones sobre la gestión de los procesos urbanos y el modelo de ciudad, como la que se dio en el período de los meses siguientes al terremoto.

Los protagonistas colectivos y los portavoces de la controversia progresivamente se fueron reconociendo, contestando y recíprocamente determinando en el curso de una coyuntura de las características que generó el terremoto. A medida que las instituciones del gobierno hacían declaraciones

³ *El Día*, 27 de septiembre de 1985; *La Jornada*, 27 de septiembre de 1985; *Unomásuno*, 27 de septiembre de 1985; *Excélsior*, 26 de septiembre de 1985. Cfr. Humberto Musacchio, *op. cit.*

⁴ *La Jornada*, 27 de septiembre de 1985.

⁵ *El Día*, 3 de octubre de 1985.

públicas, establecían los programas de vivienda, ofrecían sus soluciones⁶ o dejaban de hacer, se sucedían las entrevistas, los mítines, manifestaciones y conferencias de prensa de los damnificados. A propósito de esos días, el periodista Granados Chapa decía: "hoy más que nunca las motivaciones de los ciudadanos que se agrupan para exigir satisfacción a las demandas, o el cumplimiento de los derechos, son claras y no hay conspiración alguna, no hay agitadores profesionales, no hay subversión al servicio de ninguna potencia extranacional" (*La Jornada*, 29 de septiembre de 1985).

El 26 de septiembre se iniciaron las entrevistas de los representantes de las colonias populares del Centro, de la unidad Nonoalco-Tlatelolco y del multifamiliar Benito Juárez con el titular de la SEDUE y el Subsecretario de Vivienda de la misma institución.⁷ Para algunos eran las primeras experiencias de actuar por dentro de los aparatos estatales para introducir términos de negociación que balancearan las posiciones oficiales hacia propuestas y programas favorables a las condiciones y expectativas de los diversos sectores de la población que habían perdido su vivienda.

Las calles y los espacios del poder continuaron siendo las zonas de disonancia y réplica. Nuevamente ante el Palacio Legislativo, los vecinos de las colonias Guerrero, Morelos, 20 de Noviembre, Peralvillo, Valle Gómez, 10 de Mayo, Roma y de Tlatelolco exigieron soluciones expeditas y adecuadas para la restitución de la vivienda y denunciaron los intentos de desalojo, no sólo de los caseros, sino de las autoridades de la delegación Cuauhtémoc.⁸ En el zócalo, los vecinos damnificados de la colonia Roma, Romita, Condesa y Doctores hicieron un plantón frente al DDF para intentar ser recibidos por el Regente, con resultado negativo; informaron a la prensa que 789 familias de esa zona se habían quedado sin casa y acordaron que si no les llegaba la ayuda internacional y el Regente no aceptaba discutir el pliego petitorio, se trasladarían todos los campamentos de colonias damnificadas al zócalo.⁹

En conferencia de prensa, representantes de organizaciones de las colonias Morelos, Guerrero, Asturias, Tránsito, Tepito, Tlatelolco y también de la CONAMUP, reiteraron su protesta por el burocratismo e incapacidad de las autoridades para responder a las necesidades urgentes de la población afectada y las demandas de retiro del ejército de las zonas acordonadas por el ambiente de hostigamiento que propiciaba, suspensión de los juicios de desahucio, créditos para la reconstrucción de la vivienda y, nuevamente, la determinación de no moverse de sus barrios.¹⁰

Por su parte, el Consejo de Representantes del Multifamiliar Juárez

⁶ Cfr., el artículo de Alicia Ziccardi, en este mismo número.

⁷ Sobre la participación de las clases medias en la reconstrucción de la vivienda véase Ignacio Marván, "Estado y clase media: el movimiento de damnificados de Tlatelolco", manuscrito inédito.

⁸ *Unomásuno*, 4 de octubre de 1985.

⁹ *La Jornada*, 9 de octubre de 1985.

¹⁰ *Unomásuno*, 11 de octubre de 1985.

manifestó su desacuerdo con la opción ofrecida por la SEDUE, dentro del Programa Emergente de Vivienda, de crédito para la compra de departamentos en municipios del estado de México. Como arrendatarios de ISSSTE, reclamaban el derecho a ser restituidos con vivienda en renta, por constituir una prestación social respaldada por la misma ley de la institución y se preguntaban: ¿cómo ser sujetos de crédito?, si la mayoría de los residentes de la unidad son jubilados de bajos ingresos.¹¹

El ambiente social de los comienzos de octubre estaba plagado de incertidumbre, desconcierto, tensión y movimiento. Se estaban gestando decisiones del poder público y de los agrupamientos de damnificados. En la vivienda se condensó el principal y más amplio conflicto social y político derivado de los sismos, en una dimensión que abarcó heterogeneidad de situaciones urbanas y problemas específicos. Para el movimiento de damnificados, las respuestas debían darse colectivamente, con una visión de conjunto y fortaleciendo los acuerdos y apoyos mutuos para lograr las mejores soluciones a cada uno de los problemas suscitados. Para el Estado, las respuestas debían darse por separado, atendiendo a aplacar el conflicto y las demandas por los sectores particulares en los cuales dividió su intervención: unidades administradas por el Estado (Nonoalco-Tlatelolco y Benito Juárez); colonias de clase media (Roma, Juárez, Condesa); colonias populares de México "viejo y tradicional" (Tepito, Morelos, Guerrero, Peralvillo, etcétera).

Las respuestas se fueron dando. El 11 de octubre, el presidente de la República decreta la expropiación de predios en las colonias dañadas por los sismos de las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.¹² Hubo sorpresa y júbilo en los barrios populares; se restituyeron los puntos de convergencia entre el sentir y la demanda popular y la capacidad de presencia e intervención del poder presidencial. En la estructura urbana, el decreto expropiatorio significó un medio de intervención pública para la recuperación no especulativa de un espacio habitacional degradado, que conjuntamente operaba como un medio de distensión y control político del ambiente social, crecientemente conflictivo y contestatario, que se había generado. Pero esta intervención estatal, y la reacción de los pobladores, comenzaron rápidamente a generar sus propias contradicciones, divergencias, confusiones y nuevas reivindicaciones.

Recorriendo los barrios del centro, el presidente reconoció la obligación del gobierno de "respetar su forma de vida, sus costumbres y sus organizaciones populares", y a la demanda de participación de los vecinos en el programa de reconstrucción respondió: "voy a ordenar al Regente de la ciudad que los reciba para definir las formas en que ustedes participarán en las instancias de reconstrucción" (*La Jornada*, 13 de octubre de 1985).

¹¹ *Unomásuno*, 4 de octubre de 1985.

¹² *Cfr. Alicia Ziccardi, op. cit.*

Mientras le manifestaban su apoyo y agradecimiento a la medida expropiatoria que recientemente habían solicitado, los vecinos de las colonias Morelos, Emilio Carranza, Valle Gómez y del barrio de Tepito deslizaron una inquietud y una llamada de atención: que la expropiación no resulte en el desalojo de los habitantes (que el espíritu de la ley se cumpla) y que se revisara y ampliara la cobertura del decreto.¹³ Quizás por primera vez, el *Diario Oficial* se convirtió en un material de lectura popular, ávidamente buscado y consultado por los pobladores. Mucho del destino de su existencia social en la ciudad dependía del contenido de ese diario.

Quienes sintetizaron de la manera más precisa el significado del decreto expropiatorio en esos viejos barrios del centro fueron los de Tepito: “le ganamos a los acaparadores de vivienda, le dimos a Sarquís [...] le ganamos a Uruchurtu, a Martínez Domínguez, a Sentíes, Hank González y hasta Ramón Aguirre, que nos quería desaparecer” (*Excelsior*, 22 de octubre de 1985). Especuladores inmobiliarios, nombres de regentes y décadas de experiencia urbana, acumulada, en una resistencia profunda a otra lógica de intervención del poder público, más persistente, que intentó desarticular los arraigos y la organización popular del espacio por medio de acciones encubiertas bajo los planes y programas llamados de “revalorización”, “remodelación” urbana para los barrios deteriorados del centro.

La medida expropiatoria provocó nuevas incertidumbres y demandas. La Unión de Vecinos y Damnificados del Centro reclamó que se excluyera de la expropiación de predios la zona de inquilinato, situada en los alrededores de la plaza de la República.¹⁴ La demanda de ampliación y revisión de la expropiación se extendió rápidamente y motivó nuevas declaraciones y manifestaciones públicas. Las organizaciones vecinales de las colonias Morelos, Emilio Carranza, Valle Gómez, Roma, Doctores, Obrera y del Centro señalaron que debían expropiarse otros tres mil predios, visualizando al decreto expropiatorio como un motor de arranque para una reforma urbana que abarcaría el conjunto de la problemática de esa zona y la ciudad. Y mientras vecinos de las colonias Doctores, Obrera, Buenos Aires y Algarín acudían al Palacio Legislativo para solicitar a los diputados que gestionaran ante el Presidente la inclusión en el decreto de 300 vecindades más de esas colonias, pero que también excluyera a los predios con viviendas unifamiliares y a los inmuebles que los inquilinos ya habían adquirido en cooperativa con créditos del FONHAPO (por los errores del primer decreto habían sido expropiados),¹⁵ la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero marchaba hacia el zócalo para apoyar la decisión presidencial, pero también para demandar la ampliación de expropiación de 500 predios más en la colonia y la explicación detallada

¹³ *La Jornada*, 13 de octubre de 1985.

¹⁴ *Excelsior*, 13 de octubre de 1985.

¹⁵ *El Día*, 16 de octubre de 1985.

sobre el programa de reconstrucción en las zonas expropiadas que el Ejecutivo acababa de establecer.¹⁶

Había surgido un nuevo interlocutor y un nuevo aparato de mediación estatal para responder al problema de la vivienda en el espacio central de la ciudad. El 14 de octubre se creó el organismo descentralizado Renovación Habitacional Popular, cuya función, además de la determinada en el decreto¹⁷ también encaraba —según palabras de su director— “una función política muy delicada” (*Excelsior*, 15 de octubre de 1985). Este organismo implicó la separación del universo social de los barrios de la competencia institucional de otras dependencias, para darle un tratamiento diferenciado a la población incluida dentro de las zonas expropiadas. Parecía que la esfera de gestión se delimitaría por los ámbitos de las autoridades locales (delegacionales, subdelegaciones), las jefaturas de zonas en las cuales se dividió territorialmente la intervención de Renovación Habitacional y las dependencias que componen la estructura administrativa del Departamento del Distrito Federal. El tratamiento del problema de vivienda de la población de las unidades habitacionales y colonias de clases medias quedaría dentro de la competencia de los organismos federales (SEDUE) e instituciones de vivienda como FOVISSSTE, INFONAVIT, etcétera.

... Sin embargo, tanto la acción institucional como la práctica de gestión de los damnificados no siguieron líneas rectas ni caminos cortos y definidos. A la usual descoordinación, desinformación y maraña de facultades, atribuciones y procedimientos que caracterizan la intervención de las instituciones públicas sobre el territorio del Distrito Federal, se agregaron los múltiples requisitos y circuitos burocráticos que las dependencias involucradas establecieron para el acceso a los programas de vivienda. La cuestión técnica de los peritajes y la presentación de papeles, que para muchos habían quedado sepultados bajo los escombros, se convirtió en uno de los más graves inconvenientes que los vecinos tuvieron que enfrentar y superar.¹⁸ Los criterios y mecanismos institucionales no fueron capaces de ajustarse y adecuarse a las condiciones de vida y urgencias de los ciudadanos afectados por un terremoto. Sucedió lo que un autor califica como “un efecto de *cámara lenta*”, es decir, el desfase entre el ritmo de las necesidades y demandas de la población y los trámites administrativos engorrosos y largos y la inercia pública que posterga la solución de los conflictos cotidianos. Precisamente estos “cuellos de botella estatales” generan otro efecto: el de la autoorganización de la sociedad en movimientos vecinales y asociaciones ciudadanas (De la Cruz; 1985).

¹⁶ *El Día*, 16 de octubre de 1985. En un boletín de prensa del Frente Único de Damnificados, forma previa de agrupamiento que se dieron las organizaciones vecinales de damnificados, se dice que el decreto expropiatorio es una medida “buena pero insuficiente” y propone que se amplíe a todos los edificios derrumbados, a las viviendas dañadas que sus dueños se niegan a reconstruir, a las viviendas de renta congelada y a todos los terrenos baldíos. Cfr. *El Cotidiano*, *op. cit.*

¹⁷ Cfr. Alicia Ziccardi, *op. cit.*

¹⁸ *La Jornada*, 17 de octubre de 1985.

La vida cotidiana en los barrios y colonias, golpeada y lanzada abruptamente a los campamentos de las calles o a los albergues, se recomponía con la pesada carga de la tragedia, sobre el soporte territorial de las viejas y nuevas redes de apoyo y trabajo comunitario. Estas redes antiguas o recientes, dan nacimiento a las primeras organizaciones de damnificados que se constituyeron en reuniones de asamblea a finales de septiembre y durante el mes de octubre. En el local de la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, una de las organizaciones inquilinarias independientes de más larga experiencia y lucha desde la década de los años 1970, el 21 de octubre se tomaron los primeros acuerdos entre representantes de diversas colonias (Morelos, Centro, Tepito, Emilio Carranza, Nicolás Bravo, Valle Gómez, Doctores, Roma, Condesa, Narvarte, Obrera, Penitenciaría, Buenos Aires, 20 de Noviembre) y la unidad habitacional de Tlatelolco para organizar el primer Foro de Damnificados y constituir la Coordinadora Única de Damnificados (CUD), evento anunciado en conferencia de prensa, el día 22 de ese mes.¹⁹

En la tarde del 24 de octubre, después de cruzarse, unirse, reconocerse en mítines, movilizaciones y negociaciones se llegó a la elaboración del primer Pliego Único de Demandas de Damnificados. Este Foro condensó la manifestación de necesidades y demandas que surgieron desde el sismo, y la visión global sobre la problemática generada dentro del contexto de la actual crisis económica y aplicación de políticas de austeridad.

La confluencia de voluntades colectivas para la participación y autogestión, para la concertación democrática con las autoridades, para la defensa del derecho a la ciudad y la vivienda y para la reconstrucción del espacio urbano como un bien de uso para sus habitantes, y no como una mercancía sujeta a los intereses especulativos y al crecimiento irracional, logró establecer puntos de coincidencia que se reflejaron en las peticiones y en el plan de acción acordado como resultado de los trabajos del primer Foro. El pliego, entregado al presidente de la República el 26 de octubre (véase anexo) pedía también justicia por las consecuencias no naturales provocadas por el terremoto y retomaba la posición de que los recursos económicos destinados al pago de los intereses de la deuda externa se canalizaran a la reconstrucción nacional.

La convergencia hacia la formación de una coordinadora de damnificados permitió establecer un canal de comunicación, representación, interlocución y enlace necesario para consolidar la presencia del movimiento de damnificados ante la sociedad y el Estado y para fortalecer la capacidad de abrir espacios para la negociación y lucha.

Así se expresó: "La CUD surge como un producto del sentimiento unitario del movimiento de damnificados, como una necesidad de presentar un frente ordenado ante el Estado, con un programa de lucha conjunto. Su formación ha significado un avance cualitativo para la consecución

¹⁹ Cfr. "Síntesis de la conferencia de prensa", en *El Cotidiano*, *op. cit.*

de las demandas de los damnificados, logrando su reconocimiento político por parte del Estado como interlocutor y como único representante de los damnificados. La CUD tiene como base social organizada a sectores y organizaciones con experiencia y trayectoria previa a los sismos, así como a sectores y organizaciones que surgen a raíz de los mismos, sin experiencia previa, y, muchas veces, base 'tradicional' de apoyo al PRI, obligada a hacerlo por coerción y presión del propio PRI y que hoy están en proceso de rompimiento con él" (*Relatoría del Segundo Foro de Damnificados*, 9 de noviembre de 1985).

El pliego petitorio es llevado a la residencia presidencial de Los Pinos, el 26 de octubre por una manifestación de alrededor de 30 000 damnificados que nombraron una comisión de representantes para entrevistarse con el Presidente y entregarle el pliego petitorio.²⁰ Al no ser recibidos por ausencia del mandatario, acuerdan otra manifestación, esta vez en el zócalo, para el 29 de octubre. Finalmente, el movimiento social de damnificados logra penetrar en la institución de gobierno de la ciudad de México y ser reconocido como interlocutor y representante para el diálogo y la negociación. Mientras en el zócalo la multitud gritaba: "el pueblo callado jamás será escuchado", los representantes de la CUD se entrevistaban con el Regente, el Secretario General de Gobierno del DDF, el titular de la SEDUE y un subsecretario de Gobernación.²¹

*Los olvidados de la "Ciudad de los Palacios" **

Para algunos, el Centro Histórico de la Ciudad de México²² es el espacio construido que simboliza la majestuosa riqueza del patrimonio histórico y cultural, acumulado desde la fundación de la gran Tenochtitlán en 1325. Testimonios arqueológicos, monumentos coloniales, expresiones arquitectónicas civiles y religiosas de diversas épocas son los elementos materiales estéticos que deben ser preservados, restaurados y conservados, para que ese centro pueda cumplir con una "finalidad eminentemente educativa: que

²⁰ Cfr. Lucía Luna, "Gran marcha de Damnificados a los Pinos", en *Boletín Informativo*, núm. 2, Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre y *Voz de la Morelos*, Boletín, núm. 5, órgano informativo de la Unión Popular de Inquilinos de la Colonia Morelos-Peña Morelos.

²¹ *Excelsior*, 30 de octubre de 1985. Cfr. Mercedes G. García, "Reconocimiento a la Unión de Damnificados", en *Boletín Informativo*, núm. 2, Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre.

* *Voz de la Morelos*, Boletín, núm. 6, UPICM-PM.

²² De acuerdo con el decreto presidencial de 1980, el Centro Histórico cubre una superficie de 9.1 kilómetros cuadrados, integra 668 manzanas con 1 436 inmuebles catalogados como monumentos históricos. Cfr. A. Llorente González, *El Centro Histórico de la Ciudad de México*, ponencia presentada en la Reunión para el Estudio del Desarrollo de Ciudades y Regiones con Valores Históricos y Artísticos, SIAP, Morelia, 1982.

sus casas, edificios, templos, y conventos catalogados, así como sus plazas y jardines, deben convertirse en aulas y escuelas de convivencia y humanización, donde su población y los visitantes disfruten las más amplias manifestaciones de la cultura” (Llorente, G.: 1982).

Para otros, es el lugar privilegiado para la reestructuración capitalista de la ciudad, de acuerdo con las nuevas necesidades de valorización del espacio para las actividades rentables, financieras, comerciales, administrativas, de informática y turísticas.

La problemática de los centros históricos ha sido motivo de debate desde hace varias décadas. Contra las corrientes conservacionistas de hacer “centros-museos” o las especulativas de hacer lugares exclusivos para la ganancia económica, otras han levantado la voz para señalar que la conservación y rehabilitación de los centros antiguos no puede ser encarada como una cuestión técnica y estética, que sacrifica las necesidades sociales básicas y las formas culturales de vida de los grupos sociales que habitan el centro por generaciones (Hardoy: 1982, COPEVI, Dinámica Habitacional: 1974, 1977). Claramente, un autor lo ha expresado de la siguiente manera:

“Es prioritario precisar que las edificaciones pertenecientes al pasado, próximo o remoto, deben verse como parte integral del ambiente construido; en el cual, antes de la estética formal, hay que resolver problemas de actividades, viviendas, usos compatibles y desarrollos económicos y sociales. En otras palabras, *planificación* del centro histórico como parte orgánica de la ciudad y del territorio. El centro histórico, que no es otra cosa que la parte construida más antigua de la ciudad, es el resultado de estratificaciones de muchas épocas diversas que se han plasmado en una imagen insustituible para el carácter urbano y para la memoria y vivencia de sus habitantes” (Gasparini, 1982).

En México, el Estado ha intentado diversas intervenciones desde la década de 1950, demostrando por la vía de los hechos que actúa como “agente promotor del proceso de revalorización” (Portillo: 1984). Políticas de “salubridad urbana” (Coulomb: 1982) para los barrios calificados “herradura de tugurios” (Tepito, Lagunilla, Guerrero, Penitenciaría y Jamaica, situados al norte del primer cuadro de la ciudad); diversos programas de “regeneración urbana” de la década de 1970; construcción de ejes viales; revalorización de los usos del suelo por la construcción de obras “de prestigio” (Torre de Pémex, edificio del Banco de México, Palacio Legislativo, Proyecto Templo Mayor, Teatros de Televisa, etcétera)²³ y Programa del Centro Histórico de la Ciudad de México.²⁴ La intervención

²³ Cfr. René Coulomb, “Políticas Urbanas en la ciudad central del área metropolitana en la ciudad de México (1958-1983)”, en *Ixtapalapa*, núm. 9, julio-diciembre de 1983. También Cfr. José Rojas Loa, “La transformación de la zona central, Ciudad de México: 1930-1970”, en A. Moreno Toscano (coord.), *Ciudad de México, Ensayo de Construcción de una Historia*, México, SEP-INAH, núm. 61, 1978.

²⁴ Este programa se creó por decreto presidencial el 11 de abril de 1980. Su origen fue el proyecto de rescate arqueológico del Templo Mayor, recinto ceremonial

sobre los centros antiguos, como se ha señalado, resume el fenómeno más global de la reorganización del uso capitalista del territorio, de los movimientos sociales urbanos y de las nuevas exigencias de control social (Indovina: 1976). La intervención expropiatoria en el Centro de la Ciudad de México resultó en esta ocasión a favor de los inquilinos residentes en las vecindades. Durante varias décadas fueron los expropiados-deportados de sus viviendas y lugares de arraigo, por un proceso de despoblamiento debido a la dinámica de crecimiento de la ciudad de México²⁵ y a las acciones de los agentes públicos y privados en ese proceso de reorganización territorial. Efectivamente, los centros antiguos de las ciudades —y el terremoto que dañó severamente el centro de la ciudad de México lo volvió a comprobar— son un área de conflicto de intereses y alianzas entre una constelación de agentes urbanos y, como se ha dicho, reproducen en ellos “todos los males y las miserias de las ciudades modernas a escala metropolitana” (Crosta: 1975, Indovina: 1976).

CUADRO 1

COLONIAS CON MAYORES PORCENTAJES DE PREDIOS EXPROPIADOS

<i>Delegación Cuauhtémoc</i>	<i>%</i>	<i>Delegación V. Carranza</i>	<i>%</i>
col. Centro	18.6	col. Centro	18.2
col. Buenavista	5.1	col. Morelos	28.1
col. Doctores	11.2	col. Valle Gómez	9.3
col. Guerrero	13.6		
col. Morelos	12.6		
col. Obrera	15.4		
col. Peralvillo	7.1		

FUENTE: cuadro núm. 20, total de predios expropiados por colonia en el *Diario Oficial* (Decreto Presidencial, 21 de octubre de 1985). *Cfr.* Alicia Ziccardi, *op. cit.*

de los aztecas. Se integró un Consejo Consultivo del Centro Histórico de la Ciudad de México para la coordinación de la ejecución del programa. *Cfr.* Llorente González, *op. cit.*

²⁵ *Cfr.* Luis Unikel, “La dinámica del crecimiento de la Ciudad de México”, en *Ensayos sobre el Desarrollo Urbano de México*, México, Sepsetentas, 143, 1974.

No obstante, el deterioro urbano²⁶ de las áreas centrales y las pésimas condiciones de habitación, no han impedido la reproducción de un campo social de resistencia e identidad. Siendo un territorio en disputa, la resistencia de los inquilinos tiene que enfrentar, principalmente, a la estrategia del capital inmobiliario de realizar la renta urbana en ese espacio a costa de la expulsión de los residentes pobres (Portillo: 1984). El único obstáculo jurídico a la expansión de la especulación con el suelo urbano en la zona central, ha sido el régimen de arrendamiento de rentas congeladas, establecido en 1942, prorrogado desde 1948, hasta ser liberado —en gran parte— por el reciente decreto expropiatorio (COPEVI, *Dinámica Habitacional*: 1977):

La otra estrategia que los habitantes de las zonas de inquilinato han tenido que enfrentar es la de la acción pública, en consonancia con el capital inmobiliario, aunque entre ambos existan zonas de fricción y contradicciones que perturban o impiden completar la realización de los proyectos. La tenaz resistencia cotidiana, la más de las veces sigilosa, dispersa y puntual, y las luchas inquilinarias organizadas han sido, y son, los únicos obstáculos sociales que han impedido desarrollar hasta sus últimas consecuencias el proyecto de “limpiar de pobres” al centro de la ciudad. En este sentido, dice Ángel Mercado que “los programas de regeneración urbana del Centro Histórico devienen en conflictos sociales o en movimientos de resistencia contra el Estado, pues rompen violentamente con el proceso de reproducción social. Suspenden una oferta de vivienda en alquiler a bajo precio, rompen los equipamientos colectivos que sirven de salario indirecto y profundizan, por la expulsión hacia la periferia, la segregación social en el espacio urbano” (Mercado: 1984).

No es casual que los primeros que brincaron para advertir que no permitirán “nuevos experimentos urbanísticos en su barrio”, cuando se anunció la creación del organismo Renovación Habitacional Popular, hayan sido los vecinos de Tepito.²⁷ Si hay un barrio que tiene, no sólo una larga tradición de arraigo territorial, sino una larga memoria y experiencia de estudios, planes y programas, es Tepito. Su cronología data de 1958,²⁸ cuando comenzaron los primeros “temblores regeneradores”, en esa época por medio de un estudio elaborado por el Instituto Nacional de la Vivienda. En 1970, Tepito aparece irreconocible en unas láminas futuristas contenidas en el Plan de “Reestructuración Urbana de Zonas de Habitación

²⁶ “La noción de deterioro urbano comprende, tanto la depreciación y el daño físico de los objetos inmuebles —incluidas las redes de infraestructura— como también su ineficiencia y disfuncionalidad para realizar determinadas tareas de la ciudad. Comprende también el deterioro del patrimonio histórico.” Ángel Mercado, “Resistencia de pobladores en el centro de la ciudad de México”, en *Resistencia, organización y lucha ante el deterioro de la Ciudad*, México, IISUNAM-CIESAS, 1984 (en prensa).

²⁷ *Unomásuno*, 17 de octubre de 1985.

²⁸ Cfr. “Estudios y planes oficiales para Tepito”, en *Dinámica Habitacional*, núm. 17, México, COPEVI, 1986.

Decadentes en la Ciudad de México”, publicado por el Instituto Nacional de la Vivienda.²⁹ En los primeros años de esa década, a partir de otro proyecto de regeneración, se instaló en el barrio la acción del Plan Tepito (1974), que en 10 años pasó por la administración de doce dependencias gubernamentales y, entre otros resultados, destruyó 920 viviendas por las 556 que construyó.³⁰

El terremoto damnificó a familias que habitaban en campamentos de viviendas transitorias por no poder pagar el precio de las ofrecidas por el Plan y hasta el decreto expropiatorio de octubre de 1985 cubrió a tres predios con 54 de esas viviendas.³¹ La Asociación de Inquilinos, 25 organizaciones gremiales de comerciantes, el Consejo Representativo del barrio y un movimiento cultural local (Tepito-Arte Acá) fueron logrando acuerdos para organizar la resistencia a la continuación del Plan Tepito y contra un proyecto de centro comercial llamado Plaza Tepito, el cual logran cancelar. La exclusión de la participación de los habitantes en el diseño, ejecución y control de los procesos de mejoramiento habitacional, el desconocimiento de las condiciones económicas y de las formas sociales y culturales producidas para organizar un espacio de vida y trabajo, hicieron fracasar este plan (como otros, con costos sociales y económicos injustificables), pero motivaron que, de la resistencia, se pasara a la autogestión de alternativas propias para el desarrollo barrial.

Los sismos agravaron el deterioro de las vecindades y los estudios realizados en Tepito indican que, alrededor de 90 vecindades con 1 600 viviendas deberán ser sustituidas urgentemente. El 84% de los predios expropiados en el barrio por el decreto, son vecindades que comprenden 3 114 viviendas.³²

Tepito se movilizó junto con sus vecinos damnificados de otras colonias, tomó las calles para la protesta, integró la vanguardia de barrios que desde los primeros días armó un frente social de resistencia a cualquier argumento de expulsión y desarraigo, solicitó y festejó la expropiación pero demandó información y control sobre el programa de reconstrucción en su barrio, participó en el primer Foro de Damnificados y se replegó a la recomposición de su cotidianeidad y su lucha local. La articulación esta-

²⁹ Zona Habitacional Tepito-Merced, lámina 8. Ésta era la idea: “Se observa la sustitución de una herradura de tugurios por una zona moderna, nueva, diferente [...] Aparece una nueva forma de vida, las grandes zonas verdes, supermercados, tiendas, departamentos, escuelas, grandes plazas de estacionamientos [...] Se respetaron las iglesias coloniales.” Tomo Renovación Urbana, México, Instituto Nacional de la Vivienda, 1970.

³⁰ Cfr. A. Hernández, C. Plascencia y D. Manrique, “Tepito para los Tepiteños, Tepito Arte Acá y El fiero en la cultura”, en *Resistencia, organización y lucha ante el deterioro de la ciudad*, México, IISUNAM, CIESAS, 1984 (en prensa).

³¹ C. Acuña y A. Hernández, *Proyecto Nueva Vecindad*, México. CYAD, UAM-Azcapotzalco y Consejo Coordinador para la reconstrucción del barrio de Tepito, octubre de 1985 (multicopiado).

³² *Ibid.*

blecida desde 1979 con universidades y grupos profesionistas independientes facilitó el tránsito de las tareas de sobrevivencia en la emergencia del desastre a la preparación de proyectos de reconstrucción de nuevas vecindades que comenzaron a ser presentados y negociados en el organismo Renovación Habitacional Popular.³³ Este organismo se agrega a la larga lista de instituciones que han conmovido la vida del barrio. En esta coyuntura, es la desinformación, la larga incertidumbre por la indefinición del programa y la entrada de las empresas constructoras privadas contratadas por el organismo, que están desalojando a los habitantes de las vecindades sin informar sobre el diseño y plan de construcción, para hacer las demoliciones o reparaciones.³⁴

Desde su origen en 1872 la colonia Guerrero fue un lugar de habitación creada para la clase obrera, en esas épocas ligada a la instalación de la estación Buenavista del ferrocarril mexicano. Como en otras colonias surgidas de fraccionamientos para poblamiento popular, a fines del siglo pasado y primeras décadas de este siglo (en el norte, Peralvillo y Guerrero; al oriente, Rastro, La Bolsa, Morelos, Valle Gómez; al poniente, San Rafael, Santa Julia), las casas de vecindad se convirtieron en el modo de habitación predominante, que ofrecía la posibilidad de bajas rentas y cercanía del lugar de trabajo en las nuevas industrias y actividades eco-

³³ Con la asesoría del Taller 5 "Max Cetto" de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, el Consejo Representativo del Barrio elaboró un Plan de Mejoramiento, como contrapropuesta de los vecinos al Plan Tepito. El Plan tenía como eje de las propuestas, la forma histórica de organizar y habitar el barrio: "las vecindades son la columna vertebral del barrio y el tianguis es la bujía económica de Tepito; el patio es la prolongación de la vivienda y la calle una prolongación del patio". Este Plan obtuvo reconocimientos y premios internacionales. Cfr. Cameo Misrahi L., *El concepto de movimientos sociales urbanos. Tepito como estudio de caso*, tesis, FCP y S, UNAM, 1984. En 1982, se inicia otra etapa de articulación con equipos universitarios, en este caso con la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CYAD), de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Se trataba de elaborar proyectos de vivienda en la reserva territorial que había quedado del Plan Tepito. A partir del sismo, el apoyo técnico se dirigió a resolver los problemas urgentes de apuntalamiento, primeras reparaciones, etcétera, para luego apoyar a las organizaciones del barrio para que pudieran desarrollar un programa de Reconstrucción y Mejoramiento Integral del Barrio, controlado por los propios habitantes y no por las empresas constructoras privadas. Cfr. C. Acuña y Hernández, *op. cit.*

³⁴ *La Jornada*, 5 de febrero de 1986. El responsable del módulo de Renovación Habitacional intentó desconocer los proyectos de reconstrucción de vecindades que las organizaciones y el equipo de la UAM-Azcapotzalco ya habían presentado y fueron aprobados por el titular del organismo. Montaron guardia en los frentes de construcción y resistieron las amenazas y versiones confusas de funcionarios menores y de las empresas constructoras para hacerlos desistir de la defensa de sus proyectos. El titular del organismo tuvo que aclarar públicamente el compromiso de respetar los proyectos y de controlar la forma de operar de las constructoras. Existe entre los vecinos temor de que nuevamente se produzca una colisión de intereses económicos entre funcionarios menores y las constructoras, invalidando convenios, acuerdos y el objetivo por el cual fue creado el organismo. Cfr. *El Día*, 8 y 9 de marzo de 1986.

nómicas que se estaban localizando en el centro de la ciudad (Suárez Pa-reyón: 1977; Coulomb: 1983; Morales: 1978).

Hoy, esas viviendas continúan siendo la única alternativa posible de habitación para un conjunto social de bajos ingresos más heterogéneo; pero la ciudad no es la misma, tampoco la colonia y sus vecindades, que sufrieron un agudo proceso de deterioro físico. Progresivamente, las vecindades se convirtieron en “el espacio donde se da con mayor fuerza la violencia institucionalizada de la especulación inmobiliaria, de la distribución desigual de los ingresos y de las políticas urbanas a favor del capital inmobiliario, financiero y comercial” (Coulomb: 1984).

También los derrumbes hicieron surgir una organización de vecinos inquilinos hace ya más de una década. En 1975, comenzó la organización de la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero que, en octubre de 1985, ofreció su local y su experiencia a la iniciativa de formar la Coordinadora Única de Damnificados. Los derrumbes que sucedían año tras año (sobre todo en la época de lluvias, tumban muros y cobran vidas) y los conflictos con los caseros por el alza indiscriminada de las rentas, los desalojos y juicios de desahucio que en esos años aumentaron notablemente, impulsaron la organización para la defensa del barrio y la vivienda.

La defensa inquilinaria se sitúa en el campo difuso e intrincado de las relaciones jurídicas, desbordado ampliamente por la “inmensa zona de conflicto que el ordenamiento legal no regula” (Portillo: 1984). Por ello, la organización vecinal para fortalecer la resistencia contra los lanzamientos tiene que actuar en dos frentes principales de lucha: el legal, por dentro del aparato jurídico y los procedimientos civiles en los juzgados y tribunales, siempre teniendo en cuenta la advertencia “nunca acudas solo a un tribunal”, y el extralegal, por medio de tácticas e inventivas cotidianas para la defensa solidaria entre los vecinos, como lanzar tres cohetes que anuncian la inminencia de un desalojo y oponerse colectivamente a la acción de los caseros, actuarios y policías;³⁵ manifestaciones, mítines, plantones, denuncias por los medios de difusión y articulación de las uniones en frentes y organismos más amplios del movimiento urbano popular. Los objetivos de las luchas inquilinarias, de carácter popular y progresista, giran en torno de tres concepciones básicas sobre el uso del suelo urbano en las áreas centrales (Coulomb: 1982):

- Asignar el destino social de las zonas de inquilinato.
- Mantener la congelación de rentas como barrera a la especulación inmobiliaria.
- Expropiación a favor de los inquilinos de las vecindades propiedad de los latifundistas urbanos.

En el cuarto encuentro de la CONAMUP,³⁶ la Unión de Vecinos de

³⁵ Cfr. A. Massolo, “La participación de las mujeres en los movimientos sociales urbanos de la ciudad de México”, en *Iztapalapa*, núm. 9, México, 1983.

³⁶ En el III y IV Encuentro Nacional de la CONAMUP se discutió con mayor

la colonia Guerrero presentó la situación y problemas específicos de la vida y la lucha en las zonas de inquilinato y, como ahí se dijo, los espacios legales para la defensa de los intereses y necesidades de los inquilinos se hacían cada vez más estrechos.³⁷ La deficiencia de los instrumentos jurídicos que regulan las relaciones entre dos partes formalmente iguales, el arrendador y el arrendatario, colocan a los inquilinos (especialmente en las zonas de inquilinato popular) en una posición vulnerable. Es así que sólo el 1% de los juicios de desahucio fueron ganados por los inquilinos, entre 1975-1980 (Portillo: 1984). A su vez, la violencia ejercida contra la resistencia de los vecinos, por medio de la fuerza pública y agentes de los caseros, ha aumentado considerablemente los arrestos, detenciones y acusaciones de despojo, transformando los procesos civiles en penales.

El trabajo dentro de los problemas que plantea el marco jurídico del arrendamiento ha ocupado un largo esfuerzo de la Unión en investigación y socialización de los conocimientos legales entre los vecinos. Con la asesoría de abogados y grupos profesionistas, que brindan apoyo al movimiento urbano popular, se elaboró el "Manual del Inquilino" como un instrumento de información y consulta para realizar en mejores condiciones la defensa de los arrendatarios contra la "ofensiva jurídica" de los propietarios; se escribieron artículos sobre las reformas al Código Civil³⁸ y se promovió la iniciativa, dentro de la CONAMUP, de formar un frente inquilinario y la organización de la Primera Reunión Inquilinaria del Valle de México, en abril de 1982.

En la década de 1960, los programas de renovación urbana de las zonas centrales deterioradas, que se iniciaron con la construcción del conjunto habitacional Nonoalco-Tlatelolco y las obras viales de apertura de la avenida Reforma Norte, ocasionaron la expulsión de más de 15 000

detalle la problemática inquilinaria, y las demandas principales que se plantearon se refirieron a: Ley Inquilinaria de carácter federal y de orden público en beneficio de los arrendatarios; derogación del juicio de terminación de contrato (sólo aceptable por falta de pago o incumplimiento de contrato); regulación de los aumentos de renta de acuerdo al incremento de salarios mínimos; hacer efectivo el derecho al tanto (a favor del inquilino en caso de venta del inmueble); reconocimiento a las organizaciones inquilinarias independientes; expropiación de edificios y vecindades a favor de sus inquilinos y rechazo a los desalojos. *Cfr. El Problema Inquilinario: Situación y perspectivas*, documento de discusión, multicopiado. III Encuentro, 1982. CONAMUP, IV Encuentro, publicación de la Facultad de Arquitectura-Autogobierno, UNAM, 1984.

³⁷ *Cfr. Sistematización de Experiencias*, documento multicopiado de la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero. IV Encuentro de la CONAMUP, D. F., 1983.

³⁸ *Cfr. Manual del Inquilino*, Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, Comisión Jurídica, 1984. "Reformas al Código de Procedimientos Civiles", en *Inquilinato*, boletín informativo, núm. 2, Unión de Vecinos de la colonia Guerrero, publicado por Casa y Ciudad, México, 1984, y *Reforma a la legislación inquilinaria*, folleto ilustrado, núm. 2, publicado por Casa y Ciudad, México, 1985.

habitantes de la colonia Guerrero.³⁹ En 1978, la operación del Plan Recorridor Vial (ejes viales) profundizó el despoblamiento de la colonia y el cambio de su fisonomía.

El terremoto fue otro golpe más que recibió esta antigua colonia. Sin embargo, estaba preparada una infraestructura social de largo arraigo y existía una tradición de defensa inquilinaria independiente que hizo de la Unión de Vecinos de la colonia Guerrero una de las principales puntas de lanza del movimiento de damnificados y la primera (junto con la colonia Morelos) en poder, esta vez, festejar con el lanzamiento de los tres cohetones la inauguración de las primeras nuevas vecindades construidas con los propios esfuerzos, la asesoría de grupos profesionistas y el financiamiento de organismos solidarios internacionales.⁴⁰

La señal de alarma ya no es la amenaza de los propietarios, que dejaron de existir en los predios expropiados. La nueva figura del conflicto y de las acechanzas proviene, de acuerdo con las denuncias de la Unión, de la forma como el organismo Renovación Habitacional comenzó a operar en los barrios. Por los meses de noviembre y diciembre de 1985, la Unión hacía pública su disconformidad por la exclusión de las organizaciones vecinales independientes en la elaboración de los programas de reconstrucción; el no cumplimiento del convenio establecido entre la Unión y el titular del organismo de respetar esas organizaciones y sus proyectos;⁴¹ la intervención del partido oficial en la entrega de los certificados de derecho y en la formación de "comités vecinales de reconstrucción", paralelos a los Consejos de Renovación,⁴² con el objeto de promover la afiliación partidista y desmovilizar a los vecinos. Asimismo, denunciaban el hostigamiento de las autoridades delegacionales hacia los vecinos pertenecientes a la Unión, discriminándolos en la atención de sus trámites.⁴³

"¡Cuidado! Esta puede ser la última oportunidad de defender nuestra permanencia. Puede ser demasiado tarde después. Impulsar las asambleas de vecindad es muy importante porque juntos pensamos, proponemos y acordamos mejor lo que nos favorece y responde a nuestras necesidades y posibilidades."⁴⁴

Ésta es la voz de la Morelos, otro eco de resonancia entre los barrios del centro de la ciudad que llama a la organización y vigilancia, único medio para conjurar los múltiples peligros contenidos en la advertencia. La Unión Popular de Inquilinos de la Colonia Morelos-Peña Morelos

³⁹ Cfr. René Coulomb, "Organizaciones populares y planeación urbana en un barrio deteriorado de la ciudad de México", en *Resistencia, organización y lucha ante el deterioro de la ciudad...*, cit. 1984.

⁴⁰ *Unomásuno*, 17 de febrero de 1986.

⁴¹ *La Jornada*, 1 de noviembre de 1985.

⁴² Cfr. Alicia Ziccardi, *op. cit.*

⁴³ *La Jornada*, 14 de noviembre de 1985; *Unomásuno*, 12 de diciembre de 1985; *Unomásuno*, 21 de diciembre de 1985.

⁴⁴ *Voz de la Morelos*, órgano informativo de la UPICM-PM, núm. 7, enero de 1986.

(UPICM-PM), como otras organizaciones inquilinarias existentes antes del sismo, también tuvo que modificar y adecuar sus acciones y estructura interna para responder a la situación provocada por el terremoto.

Hace cinco años, nació por las calles de Labradores, por iniciativa de un grupo de inquilinos, para defenderse contra los desalojos y lograr en conjunto mejores negociaciones de contratos y rentas con los propietarios. El terremoto inició una nueva etapa, con nuevas tareas, proyectos y proyección territorial del trabajo organizativo de la Unión. Actualmente, 315 vecindades la integran aunque todavía la participación efectiva y constante se limita a 70 vecindades.⁴⁵

Las estrategias individuales y colectivas de sobrevivencia y las redes de identidad cultural y convivencia cotidiana (entre conflictos, violencia, chismes y apatía) son las experiencias acumuladas más difundidas y de larga persistencia en las zonas de inquilinato. Lo menos frecuente son las prácticas colectivas de organización y participación democrática dirigidas por los propios vecinos, creando sus propios objetivos, demandas y alternativas de trabajo y lucha, por fuera de las relaciones de subordinación corporativa y paternalista. El desarrollo de este aprendizaje también constituye una ardua tarea de reconstrucción para las organizaciones vecinales; probablemente la menos sencilla de todas. Uno de los requisitos previos para estimular la participación social en la gestión de los procesos urbanos es la información amplia y permanente por parte de las instituciones y autoridades públicas, quienes ejercen funciones y toman decisiones que conciernen y afectan la vida cotidiana de los ciudadanos.

Las deficiencias mostradas en este sentido por el organismo Renovación Habitacional desde el comienzo de su operación se han reflejado en una serie de confusiones, versiones, contraversiones, incertidumbre y rumores, que han contribuido a obstruir el desarrollo de las potencialidades de participación y organización vecinal en un momento histórico en el cual las urgencias de superar los graves problemas están impulsando los deseos colectivos en ese sentido.

Desde sus bases territoriales, algunas organizaciones de damnificados comenzaron a publicar, a pesar de sus precarios recursos, boletines informativos como un medio de comunicación horizontal, para suplir las carencias mostradas por los aparatos estatales y para socializar entre los vecinos las demandas sostenidas y el resultado de las negociaciones con las autoridades, los programas de trabajo y gestión acordados en sus asam-

⁴⁵ Entrevista a un representante de la UPICM-PM el 5 de febrero de 1986. La estructura interna de la Unión está compuesta por las siguientes comisiones: de organización; de abasto; de salud; técnica; jurídica; de relaciones, y de comunicación. La Asamblea de los Representantes de vecindad acuerda y sanciona todas las actividades de la Unión. Se ha promovido la formación de una cooperativa de calzado y otra de costura destinada a ofrecer una alternativa de empleo a madres solteras. Cfr. *Unomásuno*, 25 de febrero de 1986.

bleas, las experiencias vividas en el curso de los procesos organizativos desde el sismo, sus logros, dificultades y nuevos retos.

A partir de octubre de 1985, la UPICM-PM, publica su boletín *Voz de la Morelos* en el cual se manifiestan los primeros ejes de resistencia y lucha: no abandonar los lugares de arraigo; no negociar por separado para evitar la división y debilitamiento del movimiento de damnificados; en caso de desalojo, acudir a la Unión para impedirlo y mientras no se esclarezca la situación jurídica de los inquilinos no se deben pagar las rentas.⁴⁶

Por medio de la prensa, la Unión se sumó a las denuncias de otras organizaciones independientes respecto a la interferencia del partido oficial con el fin de neutralizarlas y desprestigiarlas y a la entrega de los certificados de derecho en actos partidistas encabezados por el presidente del PRI capitalino.⁴⁷ El producto de la acción pública, que debe responder al conjunto de las necesidades e intereses colectivos (en este caso, de la población damnificada en los predios expropiados), ya asumía el carácter de una nueva arma de intervención partidista, en el nuevo terreno de disputa por la reconstrucción de los barrios centrales: el político-ideológico.

“El Programa de Renovación Popular Habitacional a cuatro meses de haber sido establecido, no ha cumplido con ninguna de sus propuestas y sí, en cambio, ha creado falsas expectativas entre las familias de la colonia, lo mismo que divisionismos entre los colonos. Igualmente ha continuado con los desalojos y negativas de reparación de viviendas. Esto último ha propiciado que la Unión haya tenido que llevar a cabo procedimientos judiciales para proteger los derechos de los inquilinos. El trabajo de Renovación ha sido el de plantearle a la gente una disyuntiva: trabajar con la Unión o con Renovación. El trabajar con la Unión implica afrontar diversos obstáculos. El PRI, el Ejército de Salvación y el PST igualmente han creado divisionismos, al llevar todo un boicot en contra de la Unión, tratando de desvirtuar todo el proyecto de autoconstrucción.”⁴⁸

Este proyecto de autoconstrucción de nuevas vecindades se comenzó a realizar por el mes de noviembre de 1985, junto con la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, como una opción de restitución de la vivienda por medio de la autogestión de un proyecto “que garantice que aquí nos quedamos, cueste lo que cueste, porque aquí en la Morelos tenemos historia”.⁴⁹

El decreto expropiatorio dejó un amplio universo de vecindades y población damnificada, librada a su propia suerte, sin programas de financiamiento ni acciones decididas por parte de las autoridades delegacio-

⁴⁶ Cfr. *Voz de la Morelos...*, cit., núm. 1, octubre de 1985.

⁴⁷ *Unomásuno*, 14 de diciembre de 1985; *El Día*, 27 de diciembre de 1985.

⁴⁸ Entrevista..., cit., 5 de febrero de 1986.

⁴⁹ *Voz de la Morelos...*, cit., núm. 7, enero de 1986. Cfr. *Unomásuno*, 28 de noviembre de 1985.

CUADRO 2

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LAS COLONIAS GUERRERO (UTCC)
Y MORELOS (UPICM-PM)

*Queremos hacer vecindades de nuevo tipo, rescatando lo valioso de la vida colectiva. Que sean los mismos vecinos, a través de su organización, quienes realicen y vigilen la reconstrucción.**

PLAN DE CONSTRUCCIÓN
(en el mismo terreno)

- I. *Pasos a seguir: vivienda destruida.* *Condiciones del crédito: reglas.*
1. Acudir a las Uniones para integrar la vecindad al proyecto. 2. Limpiar el terreno de escombros con asesoría de la Unión. 3. Los arquitectos de Casa y Ciudad hacen los planos y presupuestos, que se discuten con los vecinos. 4. Se inician las obras de construcción con materiales y diseños seguros, de un solo piso, con posibilidad de ampliar a un segundo piso. 5. El trabajo de los vecinos será apoyado por los arquitectos, un maestro albañil y un ayudante. 6. Los materiales se compran a precios de mayoreo y se distribuyen a cada vecindad según las necesidades de la obra.	1. La Unión hace un estudio socioeconómico, en base al ingreso familiar. 2. Para todos los casos, el interés será de menos del 10% anual. 3. El plazo de pago depende de la capacidad económica, los pagos mensuales no excederán del 20% del ingreso familiar. 4. Una vez determinadas las condiciones, se firman los documentos.
- Requisitos para integrar el proyecto.*
- Estar organizado en la vecindad y en la Unión. Compromiso de trabajar en la reconstrucción de la vivienda propia y en la de otros vecinos.
 - Disposición a pagar el crédito para que su recuperación pueda aplicarse en otras vecindades, y a aceptar el orden y prioridades de la construcción que señale la Unión, de acuerdo con los vecinos.
- II. *Reparaciones estructurales*
(Poner castillos, cadenas, techos).
- Las mismas condiciones y requisitos.

Financiamiento

- Se otorga un crédito por el monto total de la construcción, no en dinero, sino en obra terminada (la vivienda). A cambio, se deben firmar documentos por el monto del crédito y los plazos acordados. El acceso al crédito no depende de la capacidad económica de los vecinos.

* FUENTE: Tomado del folleto *Proyecto de Reconstrucción de Viviendas en las colonias Guerrero y Morelos*, UVCC, UPICM-PM, octubre de 1985. La elaboración y ejecución del proyecto cuenta con la asesoría de Casa y Ciudad, A. C.; Corporativo de Estudios y Asesoría Jurídica, Parroquia del barrio de Los Angeles (col. Guerrero) y Fomento Cultural y Educativo, A. C. El financiamiento se logró por aportaciones particulares y de instituciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras. El proyecto, en su primera etapa, incluye la construcción de vecindades por las calles de Obreros, Pintores, Relojeros, Tapicería y callejón de Mixcalco.

nales. La demanda de ampliación del decreto, expresada desde los primeros momentos y sostenida por la CUD, no fue atendida y las agresiones de los caseros contra esos inquilinos se sucedieron en múltiples casos. De acuerdo con las declaraciones oficiales, el DDF haría emplazamientos a los propietarios de vecindades no expropiadas, pero que igualmente fueron dañadas por los sismos, para que realizaran las reparaciones y mantenimiento estipulado en las disposiciones de arrendamiento. También se ofreció establecer mecanismos de compraventa entre los caseros y los inquilinos, para que éstos pudieran disponer de una alternativa jurídica y financiera para mantener su permanencia en las viviendas y el barrio. Sin embargo, los organismos vecinales continúan denunciando que no ha ocurrido ninguna de las dos cosas y el problema de los "no-expropiados" día a día se torna más riesgoso y conflictivo.⁵⁰

La UPICM-PM, para apoyar la defensa inquilinaria en los predios no expropiados, publicó un folleto de información jurídica en el cual indican las obligaciones de reparación de los arrendadores, de acuerdo con lo estipulado en los artículos del Código Civil y el Reglamento de Construcción y orienta a los vecinos sobre los procedimientos jurídico-administrativos que deben seguir.⁵¹

Por otra zona de la colonia Morelos, cerca del barrio de Tepito, una organización de vecinos damnificados surgió espontáneamente, el 22 de septiembre de 1985, a causa de los problemas generados por el terremoto. Las primeras tareas que aglutinaron a los vecinos fueron las de la emergencia; las que siguieron estaban encaminadas a atender el problema fundamental que los afectaba: la vivienda. Para fortalecer su trabajo, la Unión Popular Centro Morelos se constituyó, ante notario público, en Asociación Civil el 22 de octubre y se estructuró con un presidente, secretaria, tesorero y diversas comisiones. En sus comienzos contaba con 140 vecindades afiliadas, pero posteriormente quedaron unas 60, entre expropiadas y no expropiadas.

"La causa de esta baja fue la entrada, por noviembre, del partido político oficial, ya que esta zona tiene grandes adeptos en este partido y es de gran influencia en la población. El número de afiliados ha disminuido pues ha surgido el oportunismo de las autoridades, tratando de desacreditar a la Unión y se han detenido los proyectos de la Unión por causas mínimas. Los principales obstáculos que impiden la participación de la gente es la intromisión del partido oficial y la desconfianza de algunas gentes ante la Unión."⁵²

⁵⁰ Cfr. *Unomásuno*, 6 de febrero de 1986; *El Día*, 19 de febrero de 1986; *Unomásuno*, 19 de febrero de 1986.

⁵¹ Cfr. *Las Vecindades que no fueron expropiadas* folleto de información jurídica, núm. 2, UPICM-PM, enero de 1986.

⁵² Entrevista a un representante de la Unión Popular Centro-Morelos, 3 de febrero de 1986. El trabajo de esta Unión comprende una zona delimitada por las calles de Lecumberri hasta Mecánicos y de Vidal Alcocer hasta Florida. Con la Fa-

La aceptación de los proyectos propuestos por la Unión, la definición de las características de los créditos y la dotación de los certificados de derecho, son las peticiones que la Unión estima que deben resolverse de urgencia, pues esta organización, como las demás, depende de la puesta en práctica de los objetivos y funciones que justificaron la creación del organismo de Renovación Popular Habitacional. Mientras, “la población es la que sufre las consecuencias”.

“porque después de dos meses de pláticas, negociaciones, ir y venir de un lado a otro, podríamos preguntarnos cuántas viviendas se han reparado, qué cantidad de proyectos de reconstrucción están caminando, en fin, cuántas soluciones existen, por lo menos en lo que se refiere a la vivienda.”⁵³

Quienes preguntan esto son los miembros de la Unión Popular Valle Gómez, organización de inquilinos que se formó a fines de 1984 para defenderse contra los desalojos y aumentos de rentas. “Reconstruir para transformar”, es la concepción que sostiene la Unión, para encarar la tarea de participación en un proceso de reconstrucción que trasciende el problema de la vivienda. Para esta agrupación de damnificados, el punto de arranque de la participación no puede ser sólo la organización, sino la apropiación del conocimiento que los vecinos hagan del conjunto de sus problemas y de la situación socio-económica, de los servicios públicos, equipamientos colectivos y del ambiente ecológico de la colonia. La investigación de las características de su propia condición de vida urbana, con el apoyo de instituciones académicas, profesionales y sindicales, hará posible que el trabajo de reconstrucción, en los aspectos de vivienda, salud, educación, empleo y servicios, aporte resultados concretos. “De esta manera, al tiempo que trabajamos por la reconstrucción, elevamos el nivel de participación y organización de la gente.”⁵⁴

Las vecindades también son “monumentos históricos”, a pesar de que su existencia como lugar de habitación y trabajo quedó olvidada en la “Ciudad de los Palacios”. Después del segundo decreto expropiatorio, estas vecindades del centro histórico de la Ciudad de México pudieron mostrar el cartel que dice: “Monumento histórico. Debe ser restaurado”. La demanda de ampliación de la expropiación de predios tuvo eco en la decisión presidencial y éste es uno de los primeros logros de la Unión de cultura de Arquitectura-Autogobierno de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Puebla y la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, está tratando de impulsar un proyecto de reconstrucción de vecindades, que se inició por las calles de Manuel Doblado.

⁵³ *Reconstruir para transformar*, documento multicopiado de la Unión Popular Valle Gómez, noviembre de 1985.

⁵⁴ *Ibid.*, Unión Popular Valle Gómez. El sismo dañó el 90% de las vecindades de esta colonia, calculadas en 300, con un promedio de 10 viviendas en cada una. Información citada en *Relatorías de las Sesiones y Conclusiones Generales del Foro: Efectos Sociales de los Sismos en la Ciudad de México*, INAH-Dirección de Estudios Históricos, enero de 1986.

Inquilinos y Damnificados del Centro, la cual fue constituida el 29 de septiembre de 1985.

La zona de trabajo de la Unión abarca una significativa porción del espacio central del poder político-administrativo y financiero de la Nación: desde las calles de Fray Servando a República del Salvador y del Eje Central Lázaro Cárdenas a la calle de Correo Mayor. Este centro fue duramente golpeado por el terremoto, pero sus habitantes históricos quedaron ignorados de la atención y ayuda oficial, no pudieron competir con la importancia asignada a los edificios de oficinas públicas, hoteles, teatros y restaurantes.

Debido a que la mayoría de las vecindades expropiadas están catalogadas como monumentos históricos, aunque quedaron inhabitables, éstas no pueden ser demolidas sino reparadas mediante convenios con otra institución con la cual los vecinos deben establecer relaciones y negociaciones, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Los planes de reconstrucción deben adecuarse a las normas y criterios de restauración que determine el INAH, de acuerdo con la estructura y características arquitectónicas originales de la época. Para los habitantes de estos inmuebles, se presenta la dificultad de hacer compatibles las normas de preservación de estilo, con el uso y aprovechamiento integral que, también históricamente, le han dado al inmueble como lugar de habitación.

Con la Universidad Autónoma Metropolitana y Renovación Popular Habitacional establecieron un convenio de reconstrucción para dos vecindades, definiendo claramente que son una organización vecinal independiente de partidos políticos, religión e instituciones del gobierno, aunque en lo individual sus miembros pueden estar afiliados a algún partido y profesar cualquier religión.⁵⁵

“La principal causa de nuestros errores es la falta de experiencia por parte de todos los que participan en la organización, ya que nadie había participado en la organización de otros grupos ni en organizarnos. En el centro se perdió la convivencia como en los barrios, estamos tratando de retomar la convivencia de barrio. En diciembre organizamos posadas por las calles y por primera vez tuvimos contacto con los vecinos. Tenemos que promover la convivencia, si vamos a pagar, tenemos que empezar a relacionarnos como vecinos y no como compadres. Esto, aunado a la intervención deshonesto del representante del partido PRI, con fines de desorientar a la gente, ha impedido en un principio la verdadera integración y seguridad de todos, desorganizando lo poco logrado. Al pedirse información a las instituciones se manejan chismes que atentan contra la organización. Renovación Habitacional quiere trabajar a través del apoyo de

⁵⁵ Cfr. “¿Qué es la Unión?”, boletín informativo de la Unión de Inquilinos y Damnificados del Centro, noviembre de 1985. A partir del sismo, también se constituyeron otras dos organizaciones vecinales en la zona central: el Comité de Lucha Inquilinaria del Centro y la Unión de Vecinos de la Colonia Centro. Cfr. *Relatorias y Conclusiones del Foro*, INAH-Dirección de Estudios Históricos, *op. cit.*, 1986.

las distintas instituciones educativas, pero la realidad es que no tiene dinero y se realiza mucha política y poco trabajo. Al mismo tiempo, las instituciones tratan de encubrir sus errores volteando la situación a las organizaciones, achacando una falta de requisitos ya cubiertos para dar largas al asunto y esto únicamente implica el que no existe capital para resolver este gran problema.”⁵⁶

De estas vecindades, que por tan largo tiempo han existido como cuñas de pobreza urbana entre lo nuevo moderno y lo esplendoroso antiguo, han surgido nuevos actores sociales que aspiran a ser partícipes de nuevas formas de pensar y realizar la remodelación del centro histórico de la Ciudad de México. Una remodelación que impida la especulación del suelo urbano y preserve el uso social y habitacional de ese espacio, recuperando lo histórico-simbólico en convivencia con la morada y el trabajo de los habitantes de las nuevas vecindades.

“Por un barrio que conserve el valor histórico del centro, rescatando los extraordinarios monumentos históricos que son orgullo de nuestra Nación. Por un barrio que cuente con todos los servicios necesarios para una vida digna.”⁵⁷

El día del terremoto, por el norte de la colonia Doctores, edificios de importantes Secretarías de Estado y de organismos públicos (como la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Trabajo y Previsión Social, la Tesorería del DDF, la Procuraduría de Justicia del DDF, la Procuraduría del Consumidor) se derrumbaron o sufrieron severos daños. Por el centro y sur de la colonia, las vecindades resentían un daño más, sumado a los daños perpetrados por décadas de abandono de mantenimiento y reparaciones por parte de los propietarios.

La colonia Doctores es también una zona de inquilinos en vecindades, alrededor de 1 000, con el 40% bajo el régimen de renta congelada. La vivienda está estrechamente ligada al trabajo en numerosos pequeños talleres de producción, servicios y en comercios de tipo familiar.⁵⁸ Ésta es una vieja colonia, formada en 1910, que ha experimentado drásticos cambios de uso del suelo y expulsión de población, particularmente por la sustitución de la función habitacional por la administrativa gubernamental y privada. Sin embargo, el espacio habitacional sufrió menos daños que las modernas edificaciones de reciente construcción, pero, como en otros barrios populares, estos edificios y usos de la ciudad le hicieron una competencia desleal a los pobladores pues acapararon la mayor atención y ayuda oficial.

⁵⁶ Entrevista a un representante de la Unión de Inquilinos y Damnificados del Centro, 1 de febrero de 1986. Cfr. *Unomásuno*, 1 de diciembre de 1985.

⁵⁷ “¿Qué es la Unión?”, *op. cit.*

⁵⁸ Cfr. *Estudio de Regeneración Urbana de la Ciudad de México*, COFEVI, 1976; y *El trabajo en la colonia Doctores a partir del sismo*, documento multicopiado de la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores, noviembre de 1985.

El apoyo y ayuda en los días de emergencia provino de la población civil, organizaciones sociales y grupos profesionistas. En todos los barrios afectados por los sismos, la necesidad de asesoría técnica para realizar los peritajes motivó una gran expectación y ansiosa búsqueda de profesionales que aportaran dictámenes confiables. Ocurrió que la descoordinación, confusión y lentitud de las dependencias públicas para hacer los peritajes y la aparición de peritos oficiales de dudosa autoridad —quienes en muchos casos parecían responder más a la consigna de los propietarios de desalojar a los inquilinos— provocaron una fuerte inseguridad en el estado de ánimo de los damnificados, apenas pasados pocos días del terremoto. La Unión de Vecinos de la Colonia Doctores comenzó a formarse precisamente a partir de la urgencia de organizar los peritajes entre los vecinos, con la colaboración de arquitectos de la Facultad de Arquitectura-Autogobierno de la UNAM. Mediante asamblea de vecinos y nombramiento de representantes por vecindad, la Unión comenzó a desarrollar su organización interna, logrando abarcar 140 vecindades con alrededor de 1 200 vecinos.⁵⁹

En octubre de 1985, la Unión publica el primer número de su boletín informativo; ya había sucedido la expropiación de predios y los vecinos de la colonia Doctores participan en las demandas, mítines, movilizaciones y negociaciones que suscitó la medida presidencial: garantía de que el espíritu del decreto expropiatorio beneficie a los ocupantes de las viviendas, pequeños talleres y comercios; ampliación de la expropiación de predios; peritajes oficiales gratuitos y asesoría técnica; reconocimiento y respeto a las organizaciones vecinales independientes, y participación de los afectados en los proyectos de reconstrucción.⁶⁰

La petición de las organizaciones vecinales por la ampliación del decreto expropiatorio también reveló, en un primer plano, el papel del capital inmobiliario en el problema habitacional de la ciudad de México y en el deterioro del salario real de un amplio sector de la población que debe alquilar vivienda. Estos agentes fueron denunciados por las organizaciones vecinales de las colonias Guerrero, Tepito, Morelos, Doctores y de la unidad habitacional Tlatelolco, como “voraces latifundistas urbanos”, a quienes la expropiación debería afectar el acaparamiento de propiedades: Gabriel Alarcón, familia Sarquís, Inmobiliarias Lomelí, Georgett Inmobiliaria, Severiano Castañeda, Alberto Regalado Valoiz, la Beneficencia Española, entre otros.⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *La Unión*, órgano informativo de la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores, núm. 1, octubre de 1985.

⁶¹ En la investigación de Alvaro Portillo, la inmobiliaria Lomelí y la Beneficencia Española aparecen en la lista de los principales latifundistas urbanos e inmobiliarias denunciadas, durante el período 1975-1980. Los más grandes casatenientes identificados en el estudio son: Eduardo y Elías Cojab Farka, con 3 000 departamentos; Serrato Ruiz, con 5 000 departamentos; Emilio Nachune, con 2 300, y Sa-

En realidad —dice la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores— el decreto expropiatorio “no atenta contra los intereses de los casatenientes que concentran en sus manos cientos de vecindades; les ‘afecta’ una mínima parte, y al hacerlo, se les libera las inversiones que tenían amarradas principalmente por el régimen de renta congelada”.⁶²

La revocación de predios expropiados provocó otro motivo de inquietud y movilización; la primera revocación determinada por las autoridades del DDF cayó en la colonia Doctores. En un mítin ante el Departamento, la Unión denunció que esa medida dejaba a los inquilinos sin ninguna protección frente a las acciones de los propietarios;⁶³ para diciembre eran ya 25 los predios revocados en la colonia, de aproximadamente un total de 125 que habían solicitado revocación o amparo del decreto.

Para las organizaciones de damnificados, los últimos meses del año de 1985 fueron también de intensa búsqueda de fuentes de financiamiento nacionales e internacionales y apoyos profesionales —todos escasos— que les posibilitaran impulsar sus proyectos de reconstrucción de vivienda.⁶⁴

Los convenios y recursos logrados eran los primeros frutos de otro frente de batalla emprendido: proponer, elaborar y realizar proyectos propios y alternativos para la restitución de la vivienda perdida, apuntando a una concepción diferente de la ciudad de México.

La Unión de Vecinos de la Colonia Doctores considera que son tres los objetivos principales que deben orientar la reconstrucción de la ciudad:

- 1) Que los habitantes del centro tengan garantías suficientes para vivir dignamente en la zona, en cuanto a suelo urbano y vivienda, y el conjunto de los servicios y el medio ambiente que se deben crear.
- 2) Participación activa y directa de todos los habitantes en todos los aspectos de la reconstrucción, sin ser excluidos de las decisiones y rechazando la imposición de representantes.
- 3) Defensa de la reproducción de los sectores populares del centro,

muel Riske, con 2 500. Cfr. A. Portillo, *El arrendamiento de vivienda en la ciudad de México*, Cuadernos Universitarios, núm. 5, México, UAM-Iztapalapa, 1984.

⁶² *El trabajo en la colonia Doctores...*, cit. Cfr. *Unomásuno*, 16 de noviembre de 1985.

⁶³ *La Jornada*, 14 de noviembre de 1985.

⁶⁴ La Unión de Vecinos de la Colonia Doctores inició un proyecto de reconstrucción de vecindades con la asesoría de diversos talleres de la Facultad de Arquitectura-Autogobierno de la UNAM y grupos profesionales independientes, obteniendo recursos de la Cruz Roja Nacional e Internacional y del Instituto del Seguro Social (IMSS), por medio de su Programa de Rehabilitación y Desarrollo Comunitario (PRODECO). Sin embargo, en febrero, los vecinos recibieron la mala noticia de que este programa del IMSS se interrumpía por recortes presupuestales, lo cual impidió la ejecución de los trabajos de reconstrucción de ocho vecindades, en beneficio de 150 familias de la colonia. Cfr. *La Unión...*, cit. núm. 2, diciembre de 1985; *La Jornada*, 6 y 23 de febrero de 1986.

por medio de la defensa del empleo, la cultura y el patrimonio histórico que representa esa zona para la Nación, estrechando los lazos entre los vecinos y organizaciones de todas las partes de la ciudad.⁶⁵

*Un nuevo rostro de la Roma, el rostro del pobre **

“80 años de vida no son poca cosa y menos aún tratándose de la colonia Roma. En efecto, resulta sorprendente que una cierta porción de la Ciudad de México concentre y resuma, de manera tan significativa y plástica, una herencia histórica rica y diversa como la que posee nuestra colonia.”⁶⁶

En 1983, la colonia Roma cumplió 80 años de creada, por esas primeras décadas del siglo xx cuando los diferentes estratos de la burguesía, que habían prosperado durante el porfiriato, se desplazaron hacia los nuevos fraccionamientos residenciales, al sur-poniente del casco antiguo de la ciudad. Entre 1910 y 1925, se construyen las casonas señoriales de la colonia Roma, con estilos arquitectónicos y urbanísticos que reflejaban los beneficios políticos y económicos del régimen oligárquico de Porfirio Díaz.⁶⁷ En esa época también surgió la colonia Condesa: “La colonia Roma, de influencia francesa, diseñada con avenidas panorámicas tipo boulevard, interrumpidas por plazas sucesivas ornamentadas con fuentes y la colonia Condesa, levantada en terrenos de la hacienda del mismo nombre, que une a la ciudad con Tacubaya, cuyas avenidas diagonales convergen en su mayoría a la gran plaza del hipódromo.”⁶⁸

Algunas de esas casonas sobrevivieron al terremoto del 19 de septiembre; sólidos y contundentes testimonios de una herencia histórica de la ciudad de México y de otra forma de construir el espacio urbano. Otras, ya no existían, habían sido eliminadas por los cambios de uso del suelo y la “modernización” de la ciudad, desatada en la década de los años de 1940, nueva etapa de prosperidad y beneficios político-económicos. La colonia Roma, progresivamente se fue convirtiendo en una zona estratégica para la valorización del suelo urbano en expansión acelerada: edificios de departamentos para habitación de nuevos sectores de clases medias, para centros de enseñanza, actividades comerciales, de servicios y recreación.

El resultado fue la transformación de la fisonomía de la colonia y

⁶⁵ *El trabajo en la colonia Doctores...*, cit.

* *Boletín informativo*, núm. 2, Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre (UV y D).

⁶⁶ Folleto conmemorativo: *80 años de la colonia Roma. Pasado, Presente y Futuro*, México, Asociación de Residentes de la Colonia Roma Norte, agosto de 1983.

⁶⁷ V. Martínez Hernández, “La vivienda del porfiriato en algunas colonias de la ciudad de México, primera parte”, en *Arquitectura-Autogobierno*, núm. 8.

⁶⁸ María Dolores Morales, “La expansión de la ciudad de México en el siglo XIX: el caso de los fraccionamientos”, en A. Moreno Toscano, *op. cit.*

“serios problemas de contaminación, vialidad, vivienda, seguridad y destrucción de nuestro patrimonio artístico y cultural, que tornan cada vez más difíciles las condiciones de vida y expulsan de la colonia a muchos de sus habitantes.”⁶⁹ El terremoto, en cambio, mató a muchos de sus habitantes y destruyó ese espacio construido, que pretendió imponerse bajo la lógica de la rentabilidad económica, la especulación inmobiliaria y el crecimiento urbano sin control y regulación por parte del poder público.

Edificios de no más de 15 años de antigüedad se desplomaron o dañaron seriamente. Algunas estimaciones indican que 749 edificios se derrumbaron y 1 450 viviendas resultaron afectadas;⁷⁰ es probablemente la colonia más devastada por los sismos, pues no sólo se destruyeron viviendas y edificios, sino que el conjunto de su soporte físico de calles, banquetas y plazas resultó dañado y alterado. La vida cotidiana de sus habitantes también. El terremoto vino a producir un parteaguas en la historia social de esta colonia de antiguos y nuevos sectores de clases medias: la emergencia de un inédito movimiento y organización vecinal para la defensa del derecho a la vivienda en la colonia. Aquí también se dio un modo sigiloso e “invisible” de arraigo, a través del tiempo y a pesar de los cambios, que el terremoto y sus secuelas políticas puso en peligro.

El 5 de octubre de 1985, en las calles de la colonia Roma, se constituyó la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre (UV y D), con la representación de 289 edificios.⁷¹ Desde sus inicios, ésta fue una de las organizaciones de damnificados más activas en el impulso a la formación de la CUD y en las movilizaciones y denuncias. El apoyo de grupos cristianos de base y los antecedentes individuales de algunos miembros, en el activismo político y sindical independiente, operó eficazmente para que se estructurara una red de solidaridad y participación vecinal sin precedentes en esta colonia. La UV y D es portadora de la grave problemática de vivienda que el sismo provocó en sectores medios que dependen del alquiler de departamentos.

Si la continua tendencia al alza de los alquileres⁷² y la desprotección jurídica de los inquilinos, no obstante las últimas reformas al Código Civil, han restringido seriamente las alternativas de habitación, los efectos del sismo en estas colonias agravaron las condiciones de residencia y permanencia de sus pobladores. Como se ha señalado, en la colonia Roma vive un “mosaico de trabajadores”,⁷³ que tiene diversas inserciones labo-

⁶⁹ *Folleto conmemorativo...*, cit.

⁷⁰ *Cfr.* A. M. Durán Contreras, documento multicopiado de la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre (UV y D), México, 1986, presentado en la mesa redonda sobre La Organización Vecinal en la reconstrucción de vivienda, México, IUSUNAM, 23 de enero de 1986.

⁷¹ Durán Contreras, *op. cit.*

⁷² *Cfr.* Guillermo Boils, “Efectos del sismo sobre la vivienda de alquiler”, en este mismo número.

⁷³ Durán Contreras, *op. cit.*

rales; muchos artesanos, comerciantes y prestadores de servicios con largo arraigo en la colonia. El sismo también “descubrió” el insospechado mundo de las vecindades que reflejan la heterogeneidad social de la colonia desde que comenzó a ser receptora de distintas fracciones de la pequeña burguesía urbana de los años cuarenta a los cincuenta. Efectivamente, un censo de vivienda afectada por los sismos,⁷⁴ identificó en la colonia Roma 16 vecindades con daños parciales habitadas por alrededor de 167 familias. Por su parte, la encuesta de población damnificada realizada por el INSUNAM⁷⁵ registró 136 domicilios en donde habitaban numerosas familias de la colonia que se encontraban en campamentos y albergues.

Si en las zonas de inquinato popular es donde se ejerce con “mayor fuerza la violencia institucionalizada de la especulación inmobiliaria” sobre la vivienda deteriorada, puede decirse que en colonias de creciente valorización de la renta del suelo, como la Roma, es donde se ejerce con mayor impunidad y energía la ganancia extraordinaria de los promotores inmobiliarios y las empresas constructoras. Desde las primeras semanas posteriores al sismo, la UV y D demandó la investigación y deslinde de responsabilidades por los numerosos derrumbes de edificios, privados y públicos, de reciente construcción, que ocasionaron la muerte de miles de personas.

“Por eso la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre ha venido exigiendo que se cumpla la Ley y que haya castigo a los responsables, que el gobierno aplique los reglamentos de construcción y las leyes de nuestro país y detenga el abuso y la especulación de los caseros, que después del sismo tratan de hacer su agosto y han subido las rentas hasta en un 300% y amenazan a nuestros vecinos con desalojarlos si no les pagan lo que piden.”⁷⁶

Contrariamente a lo previsto, el sismo no produjo una desvalorización automática de esta colonia en función de la magnitud de los daños y destrucción sufrida. Por su ubicación, cercana al centro de la ciudad, y por la infraestructura de servicios y vialidad existentes, además de la fuerte presión social sobre la demanda de vivienda, esta colonia sigue ofreciendo a promotores y propietarios expectativas de ganancia y “re-valorización” del suelo, una vez que se despejen los vestigios del terremoto y, además, sigan ausentes acciones efectivas de control público del uso del suelo urbano y de la construcción, y no se desarrolle un programa integral de reconstrucción de la colonia.

En la batalla cotidiana por la permanencia en la colonia, la UV y D ha tenido que enfrentar, y denunciar reiteradamente, las amenazas y manio-

⁷⁴ *Censo de Vivienda Derrumbada (total-parcial)*, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, septiembre de 1985. Cfr. *Proceso*, 21 de octubre de 1985.

⁷⁵ Cfr. Alicia Ziccardi, *op. cit.*

⁷⁶ *Boletín informativo*, núm. 3, de la Unión de Inquilinos y Damnificados 19 de Septiembre, diciembre de 1985.

bras fraudulentas de los caseros para expulsar a los inquilinos de las viviendas dañadas, llegando a anunciar una huelga general de pago de rentas. En cuanto al Programa Emergente de Vivienda, la UV y D ha declarado que la opción que se ofrece de casas o departamentos en los municipios del estado de México obliga a los vecinos a abandonar la colonia, y no garantiza mejores condiciones de habitación, pues, como denunciaron otros damnificados que aceptaron el traslado, se encuentran en malas condiciones y sin los servicios básicos instalados.⁷⁷

Sin duda, las opciones para este sector social de damnificados, que pelea el arraigo en una colonia como la Roma y Condesa, son limitadas y más complicadas para negociar que en los barrios populares del centro. La intervención de las autoridades delegacionales y de Renovación Habitacional para mediar entre caseros e inquilinos ha resultado inoperante y pocos acuerdos se han podido lograr para hacer las reparaciones y asegurar el alquiler o convenios de compra-venta factibles para ambas partes. Nuevos campamentos se han tenido que instalar en las calles de la colonia, ante la falta de vivienda transitoria para vecinos que no pueden seguir ocupando edificios en peligro de derrumbe.⁷⁸

Sin embargo, la reconstrucción comenzó por esta colonia a los pocos días del sismo. Rápidamente se limpiaron los escombros de algunos predios y esquinas y el DDF las ornamentó como jardincitos "post-sismo"; espacios vacíos que guardarán para siempre la memoria colectiva de la tragedia allí ocurrida y nuevos espacios públicos para la manifestación de la disidencia ciudadana.⁷⁹

El gobierno casero, los inquilinos del gobierno

En la década de 1950, la intervención del Estado en la producción de vivienda se dirigió principalmente a la vivienda en alquiler para sectores

⁷⁷ Cfr. *El Día*, 18 de febrero de 1986; *Excélsior*, 6 de febrero de 1986; *Unomásuno*, 17 de octubre de 1985.

⁷⁸ *El Día*, 2 de marzo de 1986; *Unomásuno*, 2 de marzo de 1986.

⁷⁹ La UV y D, recorrió los jardines poniendo carteles que decían: "en memoria de nuestros muertos, ignominia a quienes construyen jardines en lugar de vivienda para los sobrevivientes. ¡No hay normalidad!". *Unomásuno*, 20 de febrero de 1986; *El Día*, 21 de febrero de 1986. Para aliviar el desempleo que ocasionó el sismo entre los damnificados de la colonia, la UV y D promovió la instalación de cuatro cooperativas (cerámica, costura, consumo y para el cuidado de niños). Cfr. *Boletín informativo*, núm. 4, enero de 1986 y *Unomásuno*, 2 de marzo de 1986. Esta Unión de damnificados se caracteriza por una orientación más radicalizada en las declaraciones públicas, plantones y movilizaciones, sosteniendo las demandas, como el no pago a la deuda externa, la distribución de la ayuda internacional, la denuncia del Campeonato Mundial de Fútbol, en lugar de que el gobierno resuelva el problema de vivienda de los damnificados, y del "genocidio económico" por el aumento a las tarifas de los servicios públicos. Cfr. *Boletín informativo*, núm. 3..., cit.; *La Jornada*, 5 de febrero de 1986; *La Jornada*, 10 de febrero de 1986.

sociales de ingresos medios y bajos. Esta política habitacional fue abandonada en los primeros años de la década de los sesenta y los recursos públicos se destinaron a la construcción de vivienda en propiedad bajo la modalidad de "interés social".

Durante ese periodo, que culmina en 1964, dos organismos de seguridad social, el ISSSTE en particular y el IMSS en menor medida, financiaron el 50% del total de vivienda del sector público, construyendo conjuntos habitacionales de alquiler "subsidiado para una pequeña minoría de sus derechohabientes —burócratas y trabajadores— integrados al sistema de seguridad social".⁸⁰

El multifamiliar Presidente Benito Juárez es uno de esos conjuntos habitacionales de alquiler del ISSSTE, inaugurado en 1952, por los linderos de la colonia Roma Sur, con 1 080 departamentos y 6 480 personas que los ocuparon inicialmente.⁸¹ El terremoto hizo resurgir una reivindicación prácticamente olvidada: la vivienda en alquiler por medio del Estado.

"Los inquilinos del Multifamiliar Juárez somos trabajadores al servicio del Estado, que conquistamos nuestras viviendas en renta como una prestación laboral. En nuestro caso, no sólo se destruyeron algunos edificios, sino que, a raíz de los sismos, el gobierno pretende desconocer los derechos que ya hemos ganado."⁸²

El sismo destruyó 212 departamentos; a los pocos días los vecinos damnificados se organizaron en consejos de representantes por edificios para coordinar las labores de rescate, instalación de albergues y comenzar las negociaciones con las instituciones del gobierno. La oferta de vivienda en los municipios del estado de México (Tultitlán, Ecatepec, Coacalco), de créditos hipotecarios, y la alternativa oficial de enviar a los ancianos pensionados y jubilados hacia los asilos fue cuestionada por los vecinos en múltiples movilizaciones y declaraciones públicas, por considerar que no respondía a sus condiciones socio-económicas y a las reivindicaciones sostenidas por la organización.

Mientras se hacía la lucha en la calle,⁸³ las negociaciones iban logran-

⁸⁰ Investigación sobre vivienda. *La producción de vivienda en la zona metropolitana de la ciudad de México*, tomo II, México, Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI), 1977. "Los dos organismos han sufrido significativas pérdidas económicas por los conjuntos construidos bajo este régimen. Diversas presiones han determinado que el precio de la renta, en la mayoría de los casos, haya permanecido en el nivel fijado en el momento del otorgamiento de las unidades; con el tiempo, esos precios no han resultado suficientes ni siquiera para cubrir los gastos de mantenimiento, que han sido absorbidos por las instituciones." Alvaro Portillo, *op. cit.*

⁸¹ M. Scheingart y G. Garza, *La acción habitacional en México*, citado en Alvaro Portillo, *op. cit.* El sismo de 1957 dañó los edificios más altos de esta unidad, que fueron los mismos que se derrumbaron el 19 de septiembre de 1985, según los residentes, por falta de adecuada reparación y mantenimiento.

⁸² Folleto *Barrios en lucha*, núm. 9, noviembre de 1985. Cfr. INAH-Dirección de Estudios Históricos, *op. cit.*

⁸³ Cfr. *Unomásuno*, 17 de octubre de 1985; *Excelsior*, 13 de octubre de 1985.

do ciertos ajustes hasta tomar la forma de un convenio entre el Consejo de Representantes de la unidad y la SEDUE, ISSSTE, FOVISSSTE y FESTSE. Por medio de este convenio se acordó que se respetaría la vivienda en renta como una prestación social; los pagos para la adquisición de vivienda no debían exceder de una sexta parte del salario de los vecinos damnificados; éstos tendrían “derecho al tanto” para las viviendas reconstruidas en el mismo terreno del Multifamiliar; las familias que habían perdido sus pertenencias recibirían una ayuda económica de un millón de pesos y se les reservarían departamentos en la futura unidad habitacional de Fuentes Brotantes, en la delegación Tlalpan.⁸⁴

“Una experiencia de avance es que los habitantes de la unidad no habíamos salido a la calle para hacer gestiones colectivas, se recurría a otros mecanismos. La organización permitió la gestión colectiva y el acceso a esferas donde se hace política y se toman decisiones. Ganamos la calle y se superó el concepto gremialista estrecho; la unidad con otros damnificados dio fuerzas, identificación con otros compañeros, con otras colonias. Se pasó de las relaciones personales a las relaciones colectivas. Se impidió que se llevaran a los ancianos al asilo y se rechazó la vivienda en las zonas periféricas. La organización también identificó la corrupción en la ocupación de los departamentos, los subarriendos, irregularidades, y relaciones entre las autoridades que administran la unidad y organizaciones sindicales. Se logró con el ISSSTE la regularización de los departamentos.”⁸⁵

Otro objetivo y logro de estos antiguos inquilinos del Estado, compartidos por la organización vecinal de Tlatelolco, fue acordar con las autoridades del DDF que se detuvieran las demoliciones arbitrarias y precipitadas de los edificios dañados, sin antes realizar peritajes minuciosos y evaluar las posibilidades de reparación y rehabilitación.⁸⁶ Este trabajo de convencimiento de los damnificados del Multifamiliar Juárez y Tlatelolco, contra las tendencias a demoler, sin considerar en recuperar y hacer nuevamente útil lo existente dentro del tejido urbano, expresa lo que Campos Venutti identifica como una de las peores tendencias de la intervención pública en los centros urbanos: “la hostilidad a la recuperación edilicia”. Esta hostilidad traduce “la dificultad de aceptar la subordinación de la ciudad y de todo el territorio a los intereses colectivos y de aceptar a la comunidad en su conjunto como protagonista y árbitro de las decisiones relacionadas con el desarrollo de la ciudad y del territorio. Esta dificultad ha hecho prevalecer por mucho tiempo una concepción distorsionada del desarrollo urbano: considerar el desarrollo como simple cre-

⁸⁴ Información proporcionada por Alejandro Villamar, en la mesa redonda sobre La organización vecinal en la reconstrucción de vivienda, IUNAM, 23 de enero de 1986.

⁸⁵ Alejandro Villamar, representante del Multifamiliar Juárez, intervención en la mesa redonda citada.

⁸⁶ *Unomásuno*, 12 de diciembre de 1985; *Unomásuno*, 3 y 19 de febrero de 1986.

cimiento cuantitativo de la ciudad y no, más bien, como un mejoramiento cualitativo general".⁸⁷

Y sigue la marcha

Una porción física del tejido urbano fue desgarrada por la energía del movimiento sísmico; ese mismo tejido fue socialmente reconstituido por el movimiento cotidiano de los damnificados, nuevos actores sociales urbanos de la construcción de la ciudad de México. Esta estrategia social de recomposición de un espacio destruido, tiene, como todo movimiento urbano popular, una **dimensión política**. El eje y el ojo de la confrontación social y la negociación están puestos en los aparatos del Estado, principal interventor en las condiciones de vida urbana y principal interlocutor de las organizaciones sociales. Considerando aquí el enfoque de Jordi Borja sobre los movimientos urbanos, en el sentido de entenderlos como "aquellas acciones colectivas, casi siempre de las clases trabajadoras o populares, es decir, de los grupos más sacrificados por el desarrollo urbano y no suficientemente tenidos en cuenta por la política de equipamientos y servicios, en defensa y para mejorar sus condiciones de vida en la ciudad y sus derechos políticos locales".⁸⁸ Además, como lo señala este autor, los movimientos urbanos también "obligan" a las instituciones públicas "a modificarse, a crear interlocutores, a asumir nuevas problemáticas, a negociar y hacer concesiones".⁸⁹

Para las organizaciones de damnificados integradas a la CUD, los dos últimos meses del año de 1985 fueron un tránsito laborioso entre la complicada dialéctica de lucha y negociación y la correlación de dos fuerzas sociales y realidades urbanas distintas: la "normalización" del poder público y el agravamiento de los problemas, necesidades e incertidumbres de la población damnificada. Mientras el espacio destruido debía nuevamente normalizarse "institucionalmente", el movimiento vecinal reclamaba el derecho del no retorno a la anterior "normalidad" de la ciudad.⁹⁰ Este no retorno se apoyó sobre un conjunto de prácticas colectivas que se intensificaron en movilizaciones, entrevistas y negociaciones "por medio gabinete", declaraciones públicas y diversos eventos.

En el Segundo Foro de Damnificados, realizado el 9 de noviembre

⁸⁷ G. Campos Venutti, *Urbanística e Austeridad*, Milán, Feltrinelli, 1978. Traducción al español: *Urbanismo y Austeridad*, Madrid, Siglo XXI de España, 1981.

⁸⁸ Jordi Borja, "Los actores sociales en la construcción de la ciudad", en *Ciudad y Territorio*, núm. 3-4, España, 1983.

⁸⁹ Jordi Borja, "Movimientos Urbanos y cambio político", en *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 4, México, IISUNAM, 1981.

⁹⁰ "La CUD lucha por una normalidad distinta, más justa y humana". Cuauhtémoc Abarca, intervención en la mesa redonda sobre La Organización Vecinal en la reconstrucción de vivienda, México, IISUNAM, 23 de enero de 1986.

de 1985, la CUD hace la primera **recuperación de su experiencia colectiva** como vehículo de representación y reivindicación, y su **propia evaluación** de la actuación del movimiento urbano de damnificados y de las autoridades del gobierno, en la coyuntura generada por el terremoto.

“La profundidad lograda por el movimiento ha sido bien comprendida por el Estado, teniendo una política definida hacia el mismo, la cual ha venido diseñando de acuerdo a las características que ha impuesto el mismo movimiento. Así, al problema de la vivienda ha respondido con la expropiación, a la situación de las costureras, con el registro de su sindicato, a los trabajadores del Hospital General, con la reapertura del mismo. A la organización de los damnificados, sin embargo, ha respondido con una maraña burocrática de comisiones y comités. Por nuestro lado, hemos ido respondiendo con propuestas concretas, como son: la ampliación del decreto expropiatorio, la participación en la reconstrucción por parte de los afectados, la propuesta de una Ley Inquilinaria, y el rechazo a cualquier medida que genere la especulación con el terreno urbano. Hoy se nos plantea como una necesidad inmediata, la jerarquización de nuestras demandas, así como la preparación de las futuras entrevistas que como CUD tenemos, además de ampliar la base social del movimiento.” (Relatorías de las Sesiones... , *cit.*, INAH-Dirección de Estudios Históricos).

Del conjunto de peticiones inicialmente planteadas, la jerarquización de las demandas en esta etapa centró la problemática, esfuerzos y propuestas de los damnificados, en la restitución de la vivienda. Como se declaró, el problema de la vivienda constituía “el eje fundamental de lucha de la CUD” (*Cfr.* cuadro 3) y las tácticas de lucha, los argumentos y proyectos sostenidos en las negociaciones y las múltiples tareas cotidianas se orientaron hacia esta necesidad básica.⁹¹

Sin embargo, el problema del empleo se mantuvo como el segundo eje fundamental del programa de demandas y acciones de la CUD. Quizás como ningún otro suceso en la ciudad, el terremoto unió dos problemas y dos reivindicaciones cruciales para la reproducción de la fuerza de trabajo: habitación y empleo. Las esferas de la producción y el consumo, que por ciertas tendencias políticas y sindicales tuvieron generalmente cursos de organización y protesta separadas, se articularon inevitablemente, pues el terremoto dañó o destruyó una diversidad de fuentes de ingreso de las que depende la mayoría de la población residente en la zona afectada.⁹²

⁹¹ La demanda de ampliación del decreto expropiatorio, con una lista propuesta por la CUD de 1 500 predios adicionales, y las revocaciones de predios expropiados que estaba ejecutando el DDF, motivó protestas y manifestaciones públicas en numerosas ocasiones. De acuerdo con la información periodística, hasta febrero de 1986, el Poder Judicial había dictado sentencia contra el DDF en más de 60 amparos definitivos a propietarios de predios expropiados. Según las declaraciones de los jueces, el decreto muestra irregularidades de procedimiento y otros recursos de amparo, alrededor de 500, podrán resultar favorables a los propietarios (*Unomásuno*, 7 de febrero de 1986); *cfr.* *Unomásuno*, 11 de noviembre de 1985; *La Jornada*, 9 y 23 de noviembre de 1985.

⁹² *Cfr.* Alicia Ziccardi, *op. cit.*

CUADRO 3

COORDINADORA ÚNICA DE DAMNIFICADOS (CUD)
DEMANDAS SOBRE LA VIVIENDA

*El problema de la vivienda es hoy en la CUD el principal eje de lucha, que, junto con otros sectores de la sociedad, nos lleva a arrancar una respuesta y solución positiva por parte de las distintas dependencias del Gobierno responsables de la vivienda.**

Propiedad de la vivienda

- a) Adjudicación de los terrenos expropiados por el gobierno bajo propiedad colectiva, en patrimonio familiar, con el derecho de usufructuar la superficie, ya sea en forma cooperativa o de asociación civil.
- b) Respeto a la propiedad de los predios, terrenos, y departamentos que fueron adquiridos tiempo atrás (certificados de participación inmobiliaria y contratos de arrendamiento).
- c) Respeto al arraigo de la población dentro del barrio o sitio donde se vivía antes del sismo.
- d) Congelamiento de rentas a todos los habitantes de las zonas afectadas y a aquellas afectadas indirectamente que requieran reparación inmediata de la vivienda. Acabar con los abusos de los casatenientes y demás "hambreadores" del negocio de la vivienda.

Créditos y programas de reconstrucción

- a) Créditos para restitución, reparación y rehabilitación de vivienda, de acuerdo a las posibilidades de pago de los beneficiados, distintos tipos de créditos disponibles y bajas tasas de interés.
- b) Restitución inmediata de la vivienda. Construcción de vivienda nueva o rehabilitación con condiciones de espacio y servicios indispensables.
- c) Edificación de conjuntos habitacionales y vivienda por autoconstrucción, en las reservas territoriales de los organismos públicos (INFONAVIT, FOVISSTE, FONHAPO, AURIS, DDF).
- d) Respeto y aval a la formación de cooperativas y asociaciones civiles para la vivienda.
- e) Programa de vivienda provisional, con condiciones de seguridad, higiene y servicios indispensables.
- f) Canalizar los recursos para el pago de la deuda externa hacia la construcción de vivienda.
- g) Reconstrucción de la vivienda como función económica y social, ligada al empleo que fue afectado por el sismo, con la participación directa de los trabajadores y habitantes en la gestión de estas tareas.
- h) Coordinación conjunta de los proyectos y esfuerzos de reconstrucción de vivienda, entre el gobierno y los damnificados, evitando la dispersión y confusión por parte de las autoridades y empleados menores.

Expropiación

- a) Ampliación de expropiación de predios para buscar una mejor reordenación urbana que ayude a la reconstrucción del D. F.
- b) Determinar la propiedad de los predios expropiados a favor de los poseedores de la vivienda, aclarando el DDF el régimen de propiedad.
- c) Evitar que los predios expropiados pasen de nuevo a propiedad de los casatenientes, como en el caso de la banca nacionalizada.
- d) Reconocimiento de las listas elaboradas por la CUD, de predios dañados para su expropiación y suspensión de las revocaciones de las expropiaciones.

* FUENTE: *Relatoria del Segundo Foro de Damnificados*, organizado por la Coordinadora Única de Damnificados (CUD), Tlatelolco, Ciudad de México, 9 de noviembre de 1985.

CUADRO 4

COORDINADORA ÚNICA DE DAMNIFICADOS (CUD)

Demandas sobre el empleo

-
- Respecto a los derechos laborales.
 - Negativa a la descentralización autoritaria, violatoria de los derechos laborales.
 - Contra los despidos injustificados, aprovechando la situación vigente.
 - Por un salario o seguro de desempleo a todos los trabajadores que perdieron su fuente de ingreso a causa de los sismos.
 - Defensa y actualización jurídica de los derechos laborales.
 - Crear fuentes de trabajo para integrar a los trabajadores desempleados a las tareas de reconstrucción.
- Otorgar facilidades para la creación de cooperativas de producción y consumo.
 - Demandar a la Procuraduría General de la República y autoridades competentes, la incautación del capital de los industriales del vestido y el embargo precautorio en los centros de trabajo afectados por los sismos, hasta que se indemnicen a los trabajadores damnificados, y a los familiares de aquellos que perdieron la vida.
-

FUENTE: Relatoría del Segundo Foro de Damnificados y Conclusiones de la Asamblea Nacional de Solidaridad con los Damnificados, 16 de noviembre de 1985.

La CUD se integró a las manifestaciones de sindicatos independientes que se realizaron durante esos meses, contra la política de austeridad, el deterioro de las condiciones de vida de las clases trabajadoras y por la moratoria al pago de la deuda externa,⁹³ y planteó su posición y demandas en relación con el problema del empleo de la población damnificada.

Las mujeres, protagonistas y soporte permanente y fundamental de la sobrevivencia y lucha en el terreno de la vida cotidiana, tomaron las calles con personalidad propia y llegaron en marcha al Monumento a la Madre, el 23 de noviembre de 1985. La pérdida de vivienda e ingresos significa para ellas, la conmoción y alteración más graves que se puedan

⁹³ Participaron en la manifestación convocada por sindicatos y organizaciones populares, el 28 de noviembre de 1985, y en la marcha de trabajadores de la educación y universidades, el 22 de noviembre. *La Jornada*, 23 de noviembre de 1985.

ejercer sobre su función y responsabilidad —histórica e ideológicamente asignadas— de asegurar el mantenimiento familiar. Portaban ante la sociedad sus demandas y angustias, muchas lanzadas por primera vez al aprendizaje colectivo de la protesta y manifestación pública: “Tlatelolcas, exigimos una vivienda para nuestros hijos”; “Las mujeres de la Roma pedimos expropiación de inmuebles dañados pues es colonia popular”; “Mujeres en lucha por vivienda, nuestros hogares son primero, colonia Pensil”; “Los derechohabientes del Multifamiliar Juárez seguimos en albugues, no cumplen con convenios pactados”; y la solidaridad de las costureras damnificadas de San Antonio Abad que les dan aliento, “no desmayen, exijan, es muy triste estar en la calle, sigan adelante”.⁹⁴

La tarea de alargar en el tiempo las solidaridades y consolidar alianzas que permitieran fortalecer y ampliar la legitimidad de los objetivos y demandas de la CUD constituyó otro frente de acción que llevó a la organización de la Asamblea Nacional de Solidaridad con los Damnificados y al Primer Congreso Nacional por una Reconstrucción Democrática.⁹⁵ La causa y organización de los damnificados recibió, desde el comienzo, adhesiones y propósitos de apoyo e impulso, por parte de diversas secciones sindicales independientes, representaciones locales de algunos partidos políticos de izquierda y organizaciones de masa, instituciones de educación superior, grupos de profesionales, culturales y artísticos, comunidades cristianas de base, organizaciones del movimiento urbano popular, y algunos medios de prensa y comunicación. Sin embargo, la articulación consistente de propósitos e iniciativas y la consolidación de alianzas, en una coyuntu-

⁹⁴ Registro propio. Cfr. *El Día*, 24 de noviembre de 1985.

⁹⁵ En la Asamblea, realizada el 16 de noviembre de 1985 en Tlatelolco, la CUD solicitó compromisos de apoyo económico, asesorías jurídicas y técnicas para la elaboración de proyectos de cooperativas, reconstrucción urbana, vivienda, salud, y educación y para la difusión de la situación de los damnificados y de las actividades de la CUD. También se solicitó que los fondos para la reconstrucción de la cuenta núm. 1 de Nacional Financiera se destinaran principalmente a la construcción de vivienda (Cfr. el desplegado aparecido en *La Jornada*, el 23 de noviembre de 1985). El Congreso Nacional por una Reconstrucción Democrática, convocado para el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1985, intentó generar la discusión y participación de distintos sectores sociales sobre: la reconstrucción en el Centro Histórico, la reconstrucción en las colonias y barrios y en las unidades habitacionales, la descentralización democrática y los problemas de educación, salud y empleo. El régimen de propiedad de las nuevas viviendas surgió como uno de los temas e inquietudes más importantes, dada la indefinición del organismo Renovación Habitacional Popular sobre ese aspecto, así como sobre las características de los créditos. Representantes de la CUD manifestaron la conveniencia de promover el régimen de propiedad de interés social, bajo diversas modalidades, y que los créditos se rigieran por el criterio de la necesidad de vivienda y no por cálculos financieros de capacidad económica de los sujetos de crédito. La desinformación y parálisis de este organismo provocó numerosas manifestaciones públicas y entrevistas de la CUD, hasta avanzado el año 1986. Cfr. *La Jornada*, 9 de noviembre y 2 de diciembre de 1985; *Excelsior*, 1 de diciembre de 1985; *Unomásuno*, 7 y 20 de diciembre de 1985; *Unomásuno*, 6 de febrero y 7 de marzo de 1986.

ra de emergencia social y de urgencias inmediatas, pero con perspectivas de largo plazo de trabajo, no es fácilmente realizable; sin embargo, las causas no pueden ser sólo atribuibles a una coyuntura particular y deben buscarse en el cruce de diversas y arraigadas lógicas sociales, aspiraciones, inercias y poderes actuantes en el conjunto de los agentes sociales involucrados, en sus modos e instancias de participación.

Tampoco es fácil el camino de participación independiente frente a la óptica de los aparatos del Estado, en la medida que —como lo señalan algunos autores— el Estado mexicano “ejerce el monopolio de la política legítima y, en este sentido, es la única fuente de derecho a la política: a las demás asociaciones e individuos sólo se les concede este derecho en la medida en que el Estado lo permite” (Gilly: 1985), y, en la práctica política real y cotidiana, la forma aceptada de participación social “es aquella que es en sí misma un acto de adhesión al régimen” (Loeza: 1981). Se plantea, entonces, el escabroso tránsito por la frontera que intenta deslindar la autonomía e identidad colectiva, de la “oposición” y “manipulación política”. Las experiencias vividas por las organizaciones integradas a la CUD reflejan la ardua y delicada tarea que significa lograr ser reconocidas como interlocutores y actores copartícipes en las decisiones y proyectos de reconstrucción de la vivienda. En el quehacer cotidiano de participar, se ha sentido que: “por el hecho de ser independiente se entra en el terreno de la oposición, aún sin estar ligado a ningún partido”;⁹⁶ la lucha por “no permitir que el problema social lo reduzcan a la arena política, que es un elemento de división”;⁹⁷ “las propuestas de los partidos no son suficientes y hay que avanzar en alianzas amplias por una ciudad democrática”.⁹⁸ y que “la CUD da una lucha interna por la tolerancia, por el respeto a las elecciones políticas individuales y se reclama autonomía para la resolución de un problema social”.⁹⁹

Además, la CUD ha introducido otro elemento “sorpresa” dentro de los movimientos sociales urbanos en México: la emergencia de sectores de clases medias como protagonistas del conflicto. Esto nos recuerda la pregunta que hacía en una ocasión Manuel Castells: “¿por qué no movimientos reivindicativos urbanos de clases medias en México?, no es una imposibilidad histórica y permite crear escuelas de aprendizaje político para las clases medias”.¹⁰⁰

Efectivamente, el terremoto demostró que no es una imposibilidad

⁹⁶ Intervención del representante de la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores, en la mesa redonda sobre La organización vecinal en la reconstrucción de vivienda. IISUNAM, 23 de enero de 1986.

⁹⁷ Intervención del representante del Multifamiliar B. Juárez, en *ibid.*

⁹⁸ Intervención de un representante de la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre, en *ibid.*

⁹⁹ Intervención del representante del Multifamiliar B. Juárez, en *ibid.*

¹⁰⁰ Castells, Manuel, Seminario sobre Sociología Comparada de los movimientos sociales urbanos: UNAM, julio-agosto de 1982.

histórica, pero, sobre ese aprendizaje político, sobre las características de participación de estos sectores sociales,¹⁰¹ sobre sus límites y potencialidades futuras, sólo el análisis, reflexión y debate que se desarrollen por distintas vías, podrán fundamentar de manera más sólida las apreciaciones sobre la dinámica social que motivó el fenómeno telúrico. En el terreno cotidiano de los barrios populares, la dinámica social lleva su propio curso y exigencias, determinada por la magnitud de los problemas y presiones que sufren los pobladores;¹⁰² por la necesidad de sacar adelante los proyectos de vivienda iniciados por autogestión de las organizaciones con anterior vinculación al movimiento urbano popular y grupos profesionales, y por la eficacia de la táctica de dilación y tratamiento diferenciado que ejerce el poder público sobre las demandas y condiciones socio-políticas de la población damnificada. En su conjunto, el movimiento de damnificados también nos permite reflexionar sobre el laborioso parto de la noción y práctica de la "ciudadanía", por ejemplo, en procesos sociales orientados hacia la gestión democrática, plural y progresista de la nueva construcción social y material de la ciudad de México, pensando en el contexto en el cual se mueve este esfuerzo:

"Frente a las formas cotidianas de represión y del abuso permanente de autoridad por parte de cada individuo que se considera depositario de una porción, siquiera ínfima de esa autoridad (desde el patrullero y el funcionario que no se sienten obligados a rendir cuentas hacia abajo, sino sólo hacia arriba, hasta la ostentación de los poderes mayores), escasa conciencia puede desarrollarse de los derechos individuales, tanto en gobernantes como en gobernados. Pese a las señales de los tiempos, las con-

¹⁰¹ Cfr. Ignacio Marván, *op. cit.*

¹⁰² Las representaciones vecinales han denunciado reiteradamente el agravamiento de la situación de la población en los campamentos y albergues, por la lentitud y burocratismo de las autoridades del DDF y Renovación Habitacional Popular. Además, nuevos campamentos se están formando por organizaciones de damnificados, como la Unión de Inquilinos y Vecinos de la Colonia Peralvillo incorporada a la CUD, ante el peligro de derrumbe de las vecindades y la inoperancia de la actuación pública. Módulos del Programa de Renovación Habitacional, fueron tomados por el Movimiento Unido de Damnificados e Inquilinos (MUDI), de la Colonia Obrera y también integrado a la CUD y por vecinos de la Colonia Atlampa. El MUDI realizó un mitin el 8 de marzo frente al módulo de ese organismo, para denunciar que el responsable del módulo les detuvo la entrega de certificados de derechos, pues rechazan la entrega de certificados por el diputado distrital del PRI y el condicionamiento a que se afilien a la CNOP. Los certificados de derecho continuaron siendo entregados por miembros del partido oficial, como tradicionalmente se han entregado las escrituras de predios a los colonos de los asentamientos irregulares periféricos. La entrada de las empresas constructoras contratadas por Renovación, ocasionan nuevas fricciones e incertidumbres, pues demuelen vecindades indiscriminadamente, sin informar a los vecinos sobre las viviendas transitorias y los planos de construcción. Cfr. *Excelsior*, 19 de febrero de 1986; *Unomásuno*, 31 de enero, 6 de febrero, 19 de febrero de 1986; *El Día*, 19 y 21 de febrero; 9 de marzo de 1986; *La Jornada*, 25 de febrero y 1 de marzo de 1986.

cepciones y los métodos corporativos perduran en los hechos y en las conciencias" (Gilly: 1985).

El movimiento de damnificados también mostró la dimensión de la búsqueda de identidad cultural de los movimientos urbanos. Como múltiples experiencias lo indican, los movimientos urbanos no sólo se aglutinan a partir de bases territoriales y en torno de necesidades y aspiraciones colectivas resentidas, sino que representan el empeño por constituirse en sujetos sociales "fundadores y guardianes de sus propias tradiciones y experiencias sociales" (Evers: 1984) y por defender la autonomía de formas culturales locales, la comunicación interpersonal contra el monopolio de los mensajes de los medios de comunicación y la estandarización de la cultura (Castells: 1983). Esta búsqueda, aunque embrionaria y también permeada de contradicciones, implica la aparición de iniciativas y creación de nuevas identidades colectivas en el espacio urbano, que tienden a renovar los patrones culturales y socio-psíquicos de lo cotidiano, sobre todo en resistencia al tutelaje político tradicional (Evers: 1984).

La CUD recuperó una tradición profundamente arraigada en la cultura popular mexicana, y el día de los fieles difuntos llenó el Zócalo de la ciudad de México con otro contenido simbólico. Quizás se produjo una nueva forma de sincretismo, en el cual la muerte y el ritual se celebraron con rebeldía y memoria histórica de un dolor colectivo, y la tradición se convirtió en un nuevo vehículo de resistencia social e identidad cultural. Las tradicionales posadas de fin de año fueron el recorrido de los "sin casa" por las calles del barrio conocido, probablemente que nunca antes vio transitar a sus vecinos de esa manera y por esos motivos.¹⁰³ En este artículo hemos tratado de contribuir a la recuperación de un proceso social y político en extremo complejo, intenso y cambiante, protagonizado por la organización y lucha de un segmento de los damnificados por el terremoto del 19 de septiembre de 1985. En este día se agregaron inmensos problemas para cientos de miles de ciudadanos y para su clase gobernante; cada parte asumió también inmensas tareas y esfuerzos para responder a la situación creada, en el marco de sus respectivas capacidades, proyectos, argumentos, contradicciones y expectativas, pero todos dentro de las difíciles y estrechas condiciones que impone la crisis económica del país y las circunstancias internacionales.

Aquí, sólo ha sido posible trazar a grandes rasgos el perfil de los principales protagonistas, de sus acciones, de sus razones y objetivos, en un periodo de coyuntura plagado de interrogantes y que se alarga en el tiempo social y político de la ciudad. Entonces, lo limitado y general de este intento seguramente será superado y enriquecido por otros trabajos de

¹⁰³ La CUD también organizó varios festivales artístico-culturales como parte de sus eventos y celebraciones. En el jardín que se encuentra frente a los restos del Centro Médico, organizaciones políticas de izquierda, culturales, cristianas y de vecinos damnificados realizaron la noche del 1 de noviembre, ofrendas recordatorias de los muertos por el terremoto y un acto litúrgico.

investigación (desde distintas ópticas y disciplinas), que aporten hipótesis e interpretaciones sobre el surgimiento, actuación y tendencias futuras del movimiento y semillero de organizaciones urbanas de habitantes damnificados de la ciudad de México. Pero también, y esto es fundamental, por la propia reflexión y análisis de sus protagonistas, en la apropiación y ejercicio, presente y futuro, de su memoria colectiva.

BIBLIOGRAFÍA

- Centro Operaciones de Vivienda y Poblamiento (COPEVI), "Tepito: ¿Regeneración o desintegración de un barrio?", en *Dinámica Poblacional*, época III, núm. 2, México, 1974.
- Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COEVI), *Dinámica Poblacional*, núm. 13, diciembre de 1977.
- Coulomb, René, "Luchas populares por el control social de la tierra urbana", en *Habitación*, núms. 7 y 8, julio-diciembre de 1982.
- Coulomb, René, "Políticas urbanas en la ciudad central del área metropolitana de la Ciudad de México (1958-1983)", en *Iztapalapa*, núm. 9, UAM-Iztapalapa, México, diciembre de 1983.
- Coulomb, René, "Organizaciones populares y planeación urbana en un barrio deteriorado de la Ciudad de México", en *Resistencia, organización y lucha ante el deterioro de la ciudad*, México, 1984.
- De la Cruz, Rafael, "Encuentros y desencuentros con la democracia. Los nuevos movimientos sociales", en *Nueva sociedad*, núm. 77, Caracas, mayo-junio de 1985.
- Evers, Tilman, "Identidade, a face oculta dos novos movimentos sociais", en *Novos Estudos*, vol. 2, núm. 4, Brasil, abril de 1984.
- Gasparini, Granziano, "Patrimonio histórico y patrimonio construido existente. Consideraciones para una política de recuperación territorial", ponencia presentada en la reunión para el estudio del desarrollo de ciudades y regiones en valores históricos y artísticos, Michoacán, SIAP, 1982.
- Gilly, Adolfo, "PRI: la larga travesía", en *Nexos*, núm. 91, México, julio de 1985.
- Hardoy, Jorge, "Notas para una estrategia regional de rehabilitación de áreas históricas", en *Habitación*, núm. 6, abril-junio de 1982.
- Induvina, Francesco y Paolo Ceccarelli, "Come e Perche' L'intervento nei centri storici", en *Risacamento e Especulazione nei centri storici*, Italia, Franco Angeli Editore, 1976.
- Loeza, Soledad, "El laberinto de la pasividad", en *Nexos*, núm. 48, México, diciembre de 1981.

- Llorente González, A., "El centro histórico de la Ciudad de México", ponencia presentada en la reunión para el estudio del desarrollo de ciudades y regiones con valores históricos y artísticos, Michoacán, SIAP, 1982.
- Mercado, Ángel, "Resistencia de pobladores en el centro de la Ciudad de México", en *Resistencia, organización y lucha ante el deterioro de la ciudad*, México, IISUNAM-CIESAS, 1984 (en prensa).
- Morales, María Dolores, "La expansión de la Ciudad de México en el siglo XIX: el caso de los fraccionamientos", en Moreno Toscano, A. (coord.) *Ciudad de México-Ensayo de construcción de una historia*, México, INAH-SEP, 1978.
- Portillo, A., "El arrendamiento de vivienda en la Ciudad de México", en *Cuadernos Universitarios*, núm. 5, México, UAM-Iztapalapa, 1984.
- Suárez Parreyón, Alejandro, "La colonia Guerrero: Un caso de un deterioro urbano en la Ciudad de México", en *Arquitectura-Autogobierno* 8, 2ª parte, México, UNAM, septiembre-diciembre de 1977.